



ASOFIDUCIARIAS

Relación de Jurisprudencia sobre con el negocio fiduciario – Corte Constitucional

SENTENCIA	NORMAS DEMANDADAS / NORMAS CONSTITUCIONALES CUYO AMPARO SE SOLICITA A TRAVÉS DE ACCIÓN DE TUTELA	TEMA	FECHA	ACTORES	MAGISTRADO PONENTE	TESIS	SUBTEMAS	DECISIÓN
C-024/93	"DECRETO 1730 DE 1991, Título I Artículo 1.2.0.2.2 Título II Artículo 1.7.3.0.1 Parte novena Artículo 1.9.0.0.2	Actividad Financiera Reforma Financiera Facultades Extraordinarias	27/03/1992	Juan Carlos Esguerra Portocarreo	Ciro Angarita Barón	<ul style="list-style-type: none">"En lo que respecta a la determinación sobre si fueron atendidas o desconocidas las formalidades a las que estaba sujeta la expedición de las normas en controversia, mal podría efectuarse la comparación con los requerimientos que establezca el nuevo régimen constitucional ya que éste únicamente gobierna las situaciones que tengan lugar después de iniciada su vigencia y, por ende, la constitucionalidad por el aspecto formal tiene que ser resulta tomando como referencia el ordenamiento que regía cuando nacieron los preceptos en estudio."El legislador quiso por medio del decreto 1730 de 1991 integrar y armonizar en un mismo	<ul style="list-style-type: none">Sociedades fiduciariasReforma financieraEstatuto financieroDecreto mixtoActividad financieraDirectoresSuperintendencia bancariaReglamento AutónomoAhorro privadoSociedad de capitalizaciónMoneda	PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1.2.0.2.2.; 1.9.0.0.2; y 1.7.3.0.1 del decreto 1730 de 1991 "por el cual se expide el Estatuto Orgánico Financiero" por cuanto, -en lo que hace a los aspectos analizados-, el gobierno hizo uso adecuado de sus facultades legales y constitucionales .

						<p>cuerpo jurídico las normas vigentes referente a la legislación financiera, y que estas integren un estatuto orgánico que la regule íntegramente y derogue aquellas que no están en él, salvo lo dispuesto en el artículo 4.3.0.0.5</p> <ul style="list-style-type: none">• “La norma acusada establece que los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, los almacenes generales de depósito, las sociedades de leasing y factoring, las sociedades fiduciarias, las sociedades de capitalización, tendrán un número de directores que no será menor de cinco (5) ni mayor de diez (10).• Por cuanto respecta al número de directores de las entidades financieras y a su régimen general, disposiciones particulares del ordenamiento han establecido la aplicación de las normas propias de la ley 45 de 1923. Así las cosas, es claro que esta ley constituye disposición especial y, como tal prefiere a la de carácter	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>general, vale decir, el artículo 434 del aludido código. Pero además, es de señalar que esta última norma no fija un número máximo de directores sino uno mínimo lo cual permite concluir que en la referida materia el legislador no ha querido establecer que las sociedades anónimas tengan siempre un número fijo de directores sino cuando más, un límite mínimo.</p> <ul style="list-style-type: none">• El instrumento adecuado para el ejercicio del poder monetario es la ley, reside en el congreso de la Republica.• Es necesario precisar que hasta que se hayan dictado las normas generales a las cuales se va a sujetar el Gobierno para regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra que tenga relación con el manejo e inversión de los recursos captados del público, será el Presidente de la Republica quien va intervenir.• "El Presidente de la República sí puede en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Nacional establecer faltas y sanciones	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>correspondientes, pues esa es una manera muy efectiva de intervenir... en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado."</p> <ul style="list-style-type: none">• El decreto 1730 a que pertenece la disposición acusada es un decreto ley. No muta en nada esta naturaleza esencial la circunstancia de que el Ejecutivo haya decidido utilizar simultáneamente sus atribuciones propias del artículo 120-14 para expedir el denominado Estatuto Orgánico Financiero.• Respecto de las normas aplicables a las sociedades de capitalización se hace aplicable a las sociedades de capitalización los preceptos que regulan los establecimientos bancarios y compañías de seguro, en todo lo que no resulte contrario a sus disposiciones especiales.		
C-337/93	Artículo 85 de la ley 21 de 1992	Contrato de fiducia y	19/08/93	Jorge García Hurtado	Vladimiro Naranjo Mesa	Para la Corte es claro que en este caso la norma constituye una materia ajena al contenido propio	- Ley orgánica del presupuesto	TERCERO: Declarar EXEQUIBLE la

		administración fiduciaria				de una ley de presupuesto, como lo sostiene el demandante, y por consiguiente es violatoria del artículo 158 de la Carta. El Decreto-Ley 222 de 1983, en su artículo 147, que regula la forma como debe efectuarse la enajenación y permuta de inmuebles, no contempla, en efecto, que dicha enajenación pueda adelantarse a través de contratos de fiducia o de administración fiduciaria. Por consiguiente, debe la Corte recalcar que los contratos a que se refiere el art. 84 no se podrán celebrar con fundamento en la actualización de valores a que alude la norma, sino conforme a las normas vigentes de contratación administrativa.	- Venta y permuta de bienes de entidades públicas	primera parte del artículo 84 de la Ley 21 de 1992. "Los organismos y entidades del orden nacional, con fundamento en la actualización de valores de activos no corrientes y en especial de los bienes inmuebles realizada durante 1992, deberán programar para la vigencia de 1993 la venta de los mencionados activos que no sean necesarios para el desempeño de sus funciones". Declarar INEXEQUIBLE la última parte del artículo 84. "La enajenación de estos bienes podrá adelantarse a través de contratos de fiducia o de administración fiduciaria".
C-086/95	Artículo 32 (parcial) de la Ley 80 de 1993, (Estatuto General de Contratación Administrativa).	FIDUCIA PUBLICA Y ENCARGO FIDUCIARIO	01/03/1995	Carlos Eduardo Manrique, Juan Carlos Botero y Manuel Enrique Cifuentes.	VLADIMIRO NARANJO MESA.	<ul style="list-style-type: none">Fiducia Publica: Contrato autónomo e independiente, más parecido a un encargo fiduciario que a una fiducia (por el no traspaso de la propiedad, ni la constitución de un patrimonio autónomo), al que le serán aplicables las	- Fiducia pública - Fideicomitente. - Sociedades fiduciarias. - Licitación. - Encargo fiduciario. - Deber de imparcialidad administrativa. - Principio y derecho a la igualdad.	Declarar EXEQUIBLES los apartes del numeral 5o. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, salvo el inciso primero de la citada

						<p>normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.</p> <ul style="list-style-type: none">• La Corte entiende que el establecer requisitos respecto de la fiducia pública, como la prohibición de delegar contratos o la necesidad de convocar siempre a un concurso o a una licitación, entre otros, apuntan al querer del legislador de garantizar una transparencia y una igualdad de todos los interesados en contratar con el Estado, para que todos ellos, incluidas las sociedades fiduciarias y demás entidades del sistema financiero, se sometan a unas mismas circunstancias y condiciones.• Contratos Estatales: Todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas.• Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así lo autorice la ley, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal.• Los encargos fiduciarios que celebren las entidades	<p>- Derecho a la libre competencia económica.</p> <p>- Libre iniciativa privada</p> <p>- Libertad de empresa.</p> <p>- Principio de unidad de materia.</p> <p>- Principio de transparencia, economía y responsabilidad.</p> <p>- Principio de la tridivision de poderes.</p> <p>- Contratos administrativos</p> <p>- Trust anglosajón.</p>	<p>normatividad, que se declara INEXEQUIBLE.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	---

						<p>estatales con las entidades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren.</p> <ul style="list-style-type: none">• En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso.• La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o privada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en la presente ley.• Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior que deben realizar la Contraloría General de la República sobre la administración de los recursos públicos por tales sociedades, las entidades estatales ejercerán un	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en desarrollo de los encargos fiduciarios o contratos de fiducia.</p> <ul style="list-style-type: none">• La fiducia que se autoriza para el sector público, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del gasto.• El negocio fiduciario en el que no se efectúa necesariamente la transferencia del dominio sino la mera entrega de bienes, ni se constituye un patrimonio autónomo, corresponde a un encargo fiduciario; mientras que en aquellos casos en que se transfiera la propiedad y se constituya un patrimonio autónomo, se estaría ante una verdadera fiducia mercantil.• Los bienes afectados por el fideicomiso no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciario, razón por la cual deben figurar contablemente en forma separada y, además, el beneficiario deja de ser "dueño" de sus bienes, aunque sí lo es de los	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>beneficios que ellos reporten.</p> <ul style="list-style-type: none">• El contrato de fiducia mercantil jamás podrá contar con una duración superior a veinte (20) años (Art. 1230).		
C-221/96	Artículo 9º de la Ley 80 de 1993.	Inhabilidades en contratación/incompatibilidades en contratación	16/05/1996	Luis Alfonso Colmenares Rodríguez	JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO	<ul style="list-style-type: none">• En nada se ofende el imperio de la Constitución por haberse establecido que el hecho de sobrevenir una causal de inhabilidad o incompatibilidad en cabeza de quien ya es contratista da lugar a la obligación de éste de ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante, o a la de renunciar a su ejecución si aquello no fuere posible. Tampoco se vulnera la Carta por consagrar que quien participa en un proceso de licitación o concurso y resulta intempestivamente afectado por inhabilidades o incompatibilidades deba renunciar a dicha participación, ni se desconoce la normatividad superior por prever, como lo hace la norma, la cesión en favor de un tercero de la participación en el consorcio o unión temporal que licita o es contratista cuando la causa de inhabilidad o incompatibilidad se radica en uno de sus miembros.	<ul style="list-style-type: none">- Principio de moralidad en la función pública.- Cesión de contrato.- Consorcio.- Unión temporal.- Equilibrio contractual	Declárase EXEQUIBLE el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

						<ul style="list-style-type: none">Las inhabilidades e incompatibilidades lo que buscan es la transparencia en el proceso de contratación, soportada tal regulación en tres principios esenciales como son la transparencia, la economía y la responsabilidad, todo para garantizar la imparcialidad y selección objetiva del contratista y la celeridad, austeridad en gastos y trámites contractuales.Las consecuencias que trae consigo el incurrir en causal de inhabilidad o incompatibilidad no tiene un sentido sancionatorio sino el carácter de reglas objetivas, en guarda de la pureza y la transparencia de la contratación administrativa.		
T-259/96	En ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de tutela instaurada, a través de apoderado, por los señores Luis Urbano Olmos Olmos y Martha Cecilia Puello de Olmos, en representacion de su	Fiducia Mercantil Irrevocable /Medio de defensa Judicial Eficaz	12/06/1996	Luis Urbano Olmos Olmos y Martha Cecilia Puello de Olmos	Julio Enrique Correa Restrepo	<ul style="list-style-type: none">“En efecto, la acción de tutela en el caso propuesto se interpuso contra un particular, ante la presunta existencia de un peligro inminente de vulneración del derecho a la propiedad de una menor de edad, el cual según los actores se erige como fundamental, dado que los bienes que se reclaman constituyen su único patrimonio, y	<ul style="list-style-type: none">- Contrato de fiducia mercantil irrevocable de garantía- Patrimonio- Derecho a la propiedad privada- Derecho fundamental- Perjuicio irremediable- Subordinación/Indefensi	<ul style="list-style-type: none">1. REVOCAR en todas sus partes, los fallos de primera y segunda instancia dentro del presente proceso.2. NO ACCEDER a la tutela reclamada por XXX y XXX, en favor de la hija menor XXX, en el asunto de la referencia.

	menor hija Estefania Olmbos Puello contra la Fiduciaria Ganadera S.A FIDUGAN y el Banco Ganadero S.A					<p>de su usufructo depende la realización efectiva de otros derechos fundamentales, tales como el derecho al desarrollo integral, el derecho a la educación y el derecho a una alimentación balanceada. Se interpuso la acción como mecanismo transitorio de protección, no obstante la existencia de otros medios de defensa judicial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, solicitando, además, la expresa aplicación del principio superior que consagra la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, ante la expectativa de que la acción de las entidades demandadas ocasionaran a la menor peticionaria un perjuicio irremediable.”</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuando se hace referencia a estado de indefensión o de subordinación, se hace alusión a que, quien interpone la tutela no dispone de otro medio para hacer efectivos	<p>ón</p> <ul style="list-style-type: none">- Presunción del menor- Beneficiario- Fideicomitente	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>sus derechos fundamentales ante una posible violación, la cual requiere probarse por parte del actor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se precisa que cuando hay menores de edad de por medio, es condición suficiente para que se presuma que existe un estado de indefensión o subordinación.• El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental de aplicación indirecta, requiere conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa para ser idónea la protección por vía de tutela.• No se logra probar a la corporación que esa propiedad es la única con la que cuenta la menor para satisfacer sus necesidades ni se logra probar la absoluta insolvencia por parte de sus padres para poder garantizar los derechos invocados como en riesgo de verse vulnerados.• "Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>configuran su estructura, como la inminencia que exige...medidas inmediatas; la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente; y la gravedad de los hechos, que hace evidente la imposterabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”</p> <ul style="list-style-type: none">• Precisa la Corporación que para lograr determina la irremediabilidad del perjuicio se debe concurrir en varios elementos como lo es la inminencia que pide medidas inmediatas. La urgencia que tiene la persona y por la gravedad de los hechos que hace necesaria la aplicación de la tutela como mecanismo para obtener protección inmediata de los derechos. Cuando se dan los anteriores elementos, se considera razonable aplicar la acción de tutela como mecanismo transitorio.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> “En el caso propuesto, la concurrencia de esos elementos que configuran el perjuicio irremediable no se verifica al analizar la situación que da base a la acción de tutela, pues si lo que se pretendía era, con carácter urgente evitar que la Fiduciaria procediera al remate del ganado, ello hubiera sido posible utilizando las acciones ordinarias que ofrece la ley para estos casos, las cuales, como se dijo antes, establecen el secuestro preventivo de los bienes objeto de controversia.” 		
T-339/97	Derechos vulnerados: derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social, la vida, la igualdad y de petición, libre desarrollo de la personalidad y debida protección a las personas de la tercera edad.	FIDUCIA MERCANTIL Garantía adicional en obligaciones pensionales	17/07/1997.	Jubilados de la Flota Mercante Gran Colombiana	Alejandro Martínez Caballero.	<ul style="list-style-type: none"> El estado de subordinación alude a una relación de índole jurídica, por cuya virtud una persona depende de otra, en tanto que el estado de indefensión comporta, de igual manera, una dependencia pero derivada de circunstancias fácticas que colocan a quien lo padece en imposibilidad de defenderse de una agresión. En el caso de las personas de la tercera edad el derecho a la seguridad social, que se hace efectivo a través del pago de las correspondientes mesadas pensionales y la prestación de los servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Fiducia mercantil. Derechos prestacionales. Sistema de seguridad social integral. Derecho fundamental a la seguridad social para personas de tercera edad. Garantía para el pago de pensiones. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Principio de universalidad del sistema de seguridad social. Perjuicio irremediable 	REVOCAR las sentencias materia de la presente revisión y en su lugar TUTELAR los derechos a la vida, a la igualdad y al derecho a la seguridad social de los solicitantes por estar amenazado el mínimo vital de éstos.

						<p>médico-asistenciales, adquiere el carácter de derecho fundamental, como quiera que el mínimo vital de los ancianos, quienes se encuentran excluidos del mercado laboral o hallan serias dificultades para acceder a un empleo, depende por entero de los recursos que perciben por concepto de las pensiones.</p> <ul style="list-style-type: none">• El mínimo vital de las personas de la tercera edad no sólo resulta vulnerado por la falta de pago de las mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en la cancelación de las mismas.• Requisitos de procedencia de tutela con el objeto de evitar un perjuicio irremediable: El perjuicio ha de ser inminente, o sea, que amenaza o está por suceder prontamente, las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, no basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, la urgencia y la gravedad determinan	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en su integridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• El derecho prestacional no se limita a lo presupuestal, sino también a la seguridad de la continuidad del servicio público esencial de la seguridad social, y esto implica organización y procedimiento dentro de un contexto democrático.• El derecho social a la salud y a la seguridad social, lo mismo que los demás derechos sociales, económicos y culturales, se traducen en prestaciones a cargo del Estado, que asume como función suya el encargo de procurar las condiciones materiales sin las cuales el disfrute real tanto de la vida como de la libertad resultan utópicos.• La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado.• La conmutación pensional: Es un mecanismo excepcional en virtud del cual el I.S.S. sustituye a una empresa en el pago de las	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>pensiones legales y convencionales.</p> <ul style="list-style-type: none">• El derecho a la seguridad social es fundamental en tratándose de las personas de la tercera edad, éste puede resultar comprometido de dos maneras: por vía de una lesión directa; y por vía de una amenaza que ponga en peligro su efectividad.• Los aportes que administran los fondos de pensiones, ya sean públicos o privados, son recursos parafiscales.• Naturaleza jurídica de los fondos administradores de pensiones: Son los encargados de reconocer el derecho constitucional a la pensión, garantizan la administración de recursos con destinación prioritaria y autónoma de los dineros recaudados por el sector trabajador.• Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez sólo podrán ser administrados por sociedades fiduciarias y compañías de seguros, previa autorización de la Superintendencia Bancaria, la cual se podrá otorgar cuando la naturaleza de los planes de pensiones lo exija y siempre que no se pongan en peligro los intereses de	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>los partícipes de los diversos planes y fondos.</p> <ul style="list-style-type: none">• La administración de recursos parafiscales que provienen de los trabajadores para financiar las pensiones de jubilación e invalidez, no puede dejarse en manos de entidades que no reúnan los requisitos de ley, luego un patrimonio autónomo no reemplaza a un fondo de pensiones, y, si ese patrimonio es administrado por una fiduciaria, esto constituye una garantía adicional al derecho a ingresar al sistema de seguridad social, pero no lo suple.		
c-183/98	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 476 (parcial) del Decreto 624 de 1989, "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"	Deber de asesoría financiera y administración	06/05/98	Patricia Mier Barros	Eduardo Cifuentes Muñoz	<ul style="list-style-type: none">• Se precisa que hay 3 operaciones que tanto las sociedades comisionistas de bolsa como las sociedades fiduciarias ejercen pero las sociedades fiduciarias deben pagar IVA.• La 3 operación enuncia la Corte son;• Los servicios de asesoría financiera.• Los servicios de administración de valores, y• La fiducia mercantil -sin utilización de fondos comunes- para estructurar procesos de titularización	<ul style="list-style-type: none">- Asesoría financiera- Administración de bienes- Comisiones exenta de IVA- Principio de igualdad en la carga tributaria- Sociedad fiduciaria- Sociedad comisionista de bolsa- Legislación tributaria- Libre competencia	<p>1. Declarar EXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 476 del estatuto tributario, tal como quedó modificado por el artículo 13 de la Ley 223 de 1995.</p> <p>2. Declarar EXEQUIBLE el numeral 11 del artículo 476 del estatuto tributario, tal como quedó modificado por el artículo 13 de la Ley 223 de 1995, bajo el entendido</p>

						<p>de activos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Los 3 servicios anteriores se ejecutan a través de contratos que contienen una estructura idéntica. De aquí que la corte precisa que debe analizar si es posible excluir del pago del IVA a una institución financiera que ofrece unos mismos servicios, participa en un mismo mercado con los mismos productos y no a otra institución con los mismos supuestos.• El principio de igualdad en la carga tributaria• “Dado que a la Corte no corresponde anular un beneficio de exclusión del IVA -el que se individualiza en cabeza de las sociedades comisionistas de bolsa-, que en sí mismo no es inconstitucional, pero que sí lo llega a ser cuando en él se articula una injustificada y desigualdad distribución de la carga tributaria, lo procedente será declarar que su exequibilidad se condiciona a que el mismo se extienda a las sociedades fiduciarias cuando ejecuten operaciones similares, vale decir, las ya mencionadas de asesoría financiera, administración		<p>de que la expresión "las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por concepto de la administración de fondos comunes", se intérprete, en los términos de esta sentencia, en el sentido de que la exención allí contemplada se hace extensiva a las comisiones que cobren las sociedades fiduciarias por concepto de 1. Servicios de asesoría financiera; 2. Servicios de administración de valores, y 3. Fiducia mercantil - sin utilización de fondos comunes- para estructurar proceso de titularización de activos.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						de valores y procesos de titularización de activos.”		
T-014/99		Solidaridad en contrato de fiducia	21/01/99	Fermín Salamanca y otros	ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	<ul style="list-style-type: none">• La Corte ha establecido que, si bien el derecho a la seguridad social no tiene el carácter de fundamental, puede llegar a tenerlo cuando se vulnera o amenace algún derecho fundamental per se. Sin embargo, en el caso de las personas de la tercera edad, el derecho a la seguridad social adquiere el carácter de derecho fundamental, porque afecta el mínimo vital de los ancianos, ya que ellos se encuentran excluidos del mercado laboral y dependen de los recursos que perciben por concepto de las pensiones para dignamente sobrevivir.• La jurisprudencia es unánime al señalar el proceso ejecutivo laboral como mecanismo judicial de defensa al que deben acudir los actores, y el que hace improcedente amparar los derechos fundamentales cuya efectividad ellos reclaman. Sin embargo, la eficacia del mecanismo alternativo para la defensa de los derechos fundamentales, debe ser evaluada por el juez de tutela teniendo en cuenta la situación del actor. En los procesos que se revisan, dos de los actores son personas de la tercera edad, y la doctrina constitucional ha sido clara al	<ul style="list-style-type: none">- Seguridad social personas de la tercera edad- Subordinación e indefensión- Conmutación pensional- Procesos concursales- Derechos prestacionales- Solidaridad- Fiducia de administración y fiducia de garantía	Primero.- REVOCAR , las sentencias motivo de revisión y, en consecuencia, CONCEDER la tutela del derecho fundamental a la seguridad social de los solicitantes por estar comprobada su lesión al mínimo vital. Segundo.- ORDENAR a Colcultidos S.A. que aunque esté en curso un proceso de liquidación y haya garantía fiduciaria adicional, pague en forma oportuna las mesadas pensionales a que tienen derecho los actores hasta cuando opere la conmutación pensional y/o finalice el proceso de liquidación obligatoria de Colcultidos. Tercero.- ORDENAR a Colcultidos S.A. y Fiduango S.A. que en el término de

						<p>señalar que la ancianidad es una situación de debilidad manifiesta, que amerita una protección especial</p> <ul style="list-style-type: none">• La empresa que originariamente tiene la carga pensional es Colcultidos S. A. El hecho de haber celebrado un contrato de fiducia no la exonera de la responsabilidad laboral.• El contrato de fiducia no es una sustitución patronal en el pago de mesadas pensionales porque no implica cambio de patrono, ni continuidad de la empresa, ni continuidad de los trabajadores, luego no opera la solidaridad del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco existe otra norma jurídica de la cual se deduzca la solidaridad para obligaciones laborales por parte de quien celebre un fideicomiso.• Según el artículo 90 de la ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades en los procesos concursales asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3º, de la Constitución Política. Luego la tutela cabe como mecanismo transitorio si hay un perjuicio irremediable por el no pago de mesadas. En el presente caso, los solicitantes, salvo José Israel Rodríguez Bossa, son jubilados que al no recibir la		<p>quince días a partir de la notificación de esta sentencia hagan los reajustes necesarios al contrato de fiducia para facilitar la venta de los bienes fideicomitidos y proceder de inmediato al pago de mesadas de los solicitantes y a la conmutación pensional, una vez cumplido lo señalado en el punto sexto de esta parte resolutive.</p> <p>Cuarto.-</p> <p>SOLICITAR al director del I.S.S. que la conmutación pensional de los pensionados de Colcultidos se lleve a cabo procediéndose a dictar la correspondiente Resolución; y SOLICITAR a la Superintendencia de Sociedades que agilice los trámites de su competencia en el proceso de liquidación de Colcultidos, trámite necesario para que no haya obstáculos a la conmutación,</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>mesada se ven gravemente perjudicados y es la tutela el medio válido para solucionarles provisionalmente la ausencia de su mínimo vital con el pago de mesadas actuales.</p>		<p>en especial lo referente a la realización de activos y pago a los acreedores; todo ello en los términos razonables y legales.</p> <p>Quinto.- Llamar a prevención al liquidador y a su junta asesora para que prontamente finalice el proceso de liquidación de Colcurtidos y, si es posible se proceda, como medida transitoria, a pagar las pensiones antes de la providencia de calificación y graduación de crédito.</p> <p>Sexto.- ORDENAR A Colcurtidos S.A. que en el término de 48 horas, a partir de notificación que la Secretaría de la Corte Constitucional hará por telegrama, presente debidamente al ISS el cálculo actuarial para el trámite de la conmutación pensional. La Presidente de Colcurtidos y el</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

								<p>liquidador cumplirán esta orden, de no hacerlo se aplicarán las medidas legales correspondientes, incluidas las de carácter penal.</p> <p>Séptimo: No prospera la tutela en el caso de José Israel Rodríguez Bossa, por las razones expuestas en la presente sentencia.</p> <p>Octavo.- Hacer un llamado a prevención a Colcultidos S.A. y a Fiduanglo S.A., a la Superintendencia de Sociedades, al liquidador y su junta asesora en el proceso de liquidación de Colcultidos para que den prioridad a la atención de las mesadas pensionales por medio de la pronta liquidación y venta para garantizar las mesadas de jubilación a que tienen derecho los solicitantes de tutela, directamente</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>cubriéndolas para el trámite de conmutación pensional, sin perjuicio de las órdenes que se dan en el presente fallo. Noveno.- Como mecanismo transitorio, en el evento de que Fiduanglo reciba dineros correspondientes a la Fiducia celebrada con Colcurtidos, por cualquier concepto, pagará preferencialmente las mesadas pensionales de los solicitantes, mientras se tramita la liquidación y la conmutación. Décimo.- LIBRESE comunicación a los Juzgados de primera instancia, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Por Secretaria de la Corte Constitucional se dará prevalencia a</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								esta comunicación y a la devolución de los expedientes respectivos. Undécima.- SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo colaborar en la práctica de lo ordenado en este fallo, en especial en lo referente a la tramitación de la liquidación y la conmutación pensional para que los pensionados reciban sus mesadas. Si se aprecia que se incurre en fraude a resolución judicial u otro delito, se formulará la denuncia penal correspondiente.
C-136/99	Decreto Legislativo 2331 del 16 de noviembre de 1998, "Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo.	Expedición de decreto legislativo en estado de emergencia económica y social por el cual se crea el fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de Entidades Cooperativas en Liquidación.	04/03/1999	CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD	JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.	<ul style="list-style-type: none">La garantía constitucional del derecho de asociación no comprende sólo el momento inicial de la asociación sino que se extiende a lo largo de la vida del ente societario, siendo parte de la libertad misma de los asociados la que se refiere tanto a la decisión de mantener su subsistencia, a menos que circunstancias extremas que comprometan el interés general prevalente lleven a su liquidación	<ul style="list-style-type: none">- Contrato de fiducia mercantil de administración.- Declaratoria de estado de emergencia económica y social.- Libertad de asociación.- Principio constitucional de solidaridad.- Dación en pago.- Exenciones tributarias.- Principio de legalidad del gasto.- Rentas de destinación específicas.	Declárase EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 2331 de 1998, "por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo.

						<p>forzosa por el Estado, como a la forma societaria que han escogido, de tal manera que las transformaciones son actos de voluntad de quienes están asociados, eso sí dentro de los requisitos que la ley señale y con las precauciones que las autoridades de vigilancia y control deben mantener, dentro de la órbita de sus atribuciones, en guarda de los intereses de terceros y del cumplimiento de las obligaciones del ente que se transforma.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ordenes de capitalización: Son medidas tendientes a asegurar unos límites mínimos de capital para evitar la crisis que pudiera generarse en una deficiencia del mismo.• En el Estado de Emergencia aun con la limitante de la relación específica y exclusiva entre las causas de la crisis y las medidas que se adopten, es probable que, por la misma naturaleza de las materias que conforman su objeto, se requieran disposiciones de mayor profundidad en la estructura normativa sobre cuestiones económicas o sociales, de manera tal que para	<ul style="list-style-type: none">- Principio de equidad tributaria.- Principio de progresividad del tributo.- Principio de igualdad.- Equilibrio económico.- Contrato de empréstito.- Cosa juzgada constitucional.- Principio de efectividad.- Principio de prevalencia del interés general sobre el bien particular.- Contrato de leasing o arrendamiento financiero.- Principio de buena fe.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>impedir la extensión de los efectos de la perturbación producida o inclusive con el propósito de mantener las condiciones que impidan su reaparición, puede resultar indispensable no sólo la vigencia permanente de los decretos legislativos en esto se distinguen, además del objeto, de los que se dictan en los casos de los artículos 212 y 213 C.P. sino la reforma de los estatutos ordinarios que rigen para determinado sector.</p> <ul style="list-style-type: none">• Es posible al Presidente de la República en los estado de excepción establecer o modificar contribuciones y reformar, con miras al efectivo control de la situación de la emergencia, y únicamente en la medida de su necesidad y apremio, las partidas del presupuesto, y también imponer tributos enderezados específica y directamente a atacar las causas de perturbación y a impedir que sus consecuencias proliferen.• Los dineros que se recauden por concepto de los mecanismos de financiación propios de la emergencia deben dirigirse todos y	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>exclusivamente a los sectores materialmente afectados por las circunstancias críticas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Durante el Estado de Emergencia el Ejecutivo está facultado inclusive para asumir la función legislativa de modificar la estructura de la administración nacional (art. 150, numeral 7, C.P.), si ello se revela como apropiado y urgente para controlar de manera efectiva la situación de anormalidad.• Las empresas estatales que se privaticen deben ser ofrecidas a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, en condiciones especiales.• La constitución confía al Estado la dirección general de la economía y le ordena intervenir, por mandato de la ley que no solamente puede serlo la expedida por el Congreso sino también la contenida en decretos legislativos expedidos por causa de grave emergencia, para racionalizar aquélla, con el fin de conseguir, entre varios objetivos más, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>oportunidades y los beneficios del desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none">• El Estado tiene los deberes de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica entre otras causas se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.• Nuestro sistema jurídico, reconoce aunque no con carácter absoluto la autonomía de la voluntad privada.• El Estado de Emergencia no representa una investidura legislativa plena para el Presidente de la República. Es decir, declarada la perturbación en el orden económico, social o ecológico del país, las atribuciones que asume el Ejecutivo están delimitadas por la propia Constitución.• El principio de legalidad del gasto que también impera durante los estados de excepción, en la medida en que el gobierno, actuando como legislador extraordinario, debe hacer las	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>correspondientes adiciones presupuestales para que tales inversiones puedan ser efectivamente realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector.• Son usuarios del sistema financiero las personas que con él establecen relaciones crediticias o de ahorro y manejo de dinero, a través de la celebración de contratos como los de cuenta corriente, cuenta de ahorros, o apertura de crédito en sus distintas modalidades.• Las rentas nacionales de destinación específica, se refieren exclusivamente a rentas de naturaleza tributaria o impuestos.• El principio de igualdad contemplado en la Constitución implica que el Estado y sus autoridades den el mismo trato a las situaciones que son asimilables y trato diverso a las que presentan características distintas• El sistema tributario debe fundarse en los principios		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						de equidad y progresividad.		
C-783/99	Artículo 2o. (parcial) de la Ley 448 de 1998	Fiducia pública. Libre competencia, libertad de empresa e igualdad	13/10/99	Patricia Mier Barros	ALVARO TAFUR GALVIS	<ul style="list-style-type: none">• El Fondo es una cuenta especial sin personería jurídica, por fuera del presupuesto nacional y a su vez se instituye como un conjunto de recursos de entidades de derecho público afectados a un fin preciso, vinculado a la realización de programas a ellas asignados. Adicionalmente, la configuración de dicho Fondo constituyó un mecanismo de liquidez de las garantías otorgadas para respaldar las obligaciones contingentes de esas entidades públicas, permitiendo el cubrimiento de eventos no esperados, siendo una forma de ahorro público, y un instrumento de eficiencia en el uso de los recursos estatales.• Las medidas adoptadas en la Ley 448 de 1998 encuentran sustento en diversas disposiciones constitucionales que le otorgan al Estado la dirección general de la economía. Al Presidente de la República le da la facultad de organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio y, al Contralor General de la República, la obligación de llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.	<ul style="list-style-type: none">- Contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios- Descentralización por servicios- Función administrativa- Fondos especializados para administrar recursos públicos- Contrato de fiducia- Discriminación negativa	Declarar EXEQUIBLE la expresión “administrada por la fiduciaria La Previsora” contenida en el artículo 2o. de la Ley 448 de 1998 “por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento”.

						<ul style="list-style-type: none">• El Estado está obligado a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la planeación y control de las variables macroeconómicas, con el objetivo de que su monto se conozca con certeza y se encuentre suficientemente garantizado con los recursos estatales con que se dispone. Las obligaciones contingentes de la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden, claramente forman parte de la deuda pública. Por lo tanto, el manejo racional de aquellas, requiere de una regulación legal que fije condiciones seguras de estabilidad presupuestal en la administración de los recursos públicos de las entidades estatales.• Las características de la función administrativa se mantienen cuando el legislador, en ejercicio de su autonomía constitucional, afecta unos recursos públicos a un determinado fin, crea un fondo para su administración y encarga de ésta a una persona pública, como en el presente caso. Incluso cuando es más, continúa desenvolviéndose bajo los mismos parámetros administrativos, la asignación que de esa administración realice el legislador aún en	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>cabeza de una persona de naturaleza privada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Del fin perseguido con la creación del Fondo resulta la especificidad en el señalamiento de la entidad que realizará el manejo y administración del mismo, dadas las especiales características que presenta en su propia organización interna y objeto social, como en su ubicación y participación dentro de la organización del Estado.• La fiduciaria La Previsora es una entidad descentralizada por servicios que en desarrollo de su objeto social gestiona un interés propio del Estado, a través de la realización de una actividad de naturaleza financiera. Esta Fiduciaria, para el desarrollo de su objeto social, entre muchas otras actividades que le señala el artículo 6o. de sus Estatutos Sociales, podrá:<ul style="list-style-type: none">“i. En virtud de contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios, llevar la representación y administración de cuentas especiales de la Nación y de los fondos de que trata el artículo 276 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero...” <p>En forma complementaria a la actividad fiduciaria que dicha sociedad adelanta ordinariamente, ha sido amplia</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>su experiencia en el manejo de fondos especializados para administrar recursos públicos destinados al cumplimiento de una finalidad estatal de interés general</p> <ul style="list-style-type: none">• La Ley 448 de 1998, designó a la Fiduciaria La Previsora como administradora del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales acogiendo la recomendación hecha por el gobierno nacional al efectuar la respectiva propuesta legislativa, en virtud de su carácter de entidad financiera estatal “con amplia experiencia en el manejo de fondos especializados”• La razón primaria para que hubiese operado dicha escogencia radica en la atribución legal de una función administrativa estatal a una entidad que forma parte de la estructura del Estado, lo que en consonancia con la jurisprudencia de la Corte cumple con la posibilidad del Legislador “... de conferir nuevas funciones y atribuciones a ciertos órganos estatales, pero siempre respetando la estructura del Estado prevista por el Constituyente.”• Finalmente, es claro que el señalamiento de La Fiduciaria La Previsora como responsable de la administración del Fondo de Contingencias de las Entidades	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Estatales no configura una discriminación negativa para las demás sociedades fiduciarias privadas ni públicas del sector financiero del país, pues en la norma acusada, la determinación de un trato diverso presenta una justificación objetiva y razonable, dado que, la administración del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, por La Fiduciaria La Previsora, no está sujeta a la celebración de una fiducia; por lo tanto, la disposición demandada no formula una regulación privilegiada de un contrato específico, en desmedro de aquellos que puedan celebrar quienes realizan de manera lícita la misma actividad fiduciaria.		
C-955/00	Leyes 546 del 23 de diciembre de 1999 y 550 del 30 de diciembre del mismo año.	Ley marco y sistema financiero, y asegurador y bursátil.	26/07/00	Alejandro Baquero Nariño y Humberto de Jesús Longas Londoño	JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO	<ul style="list-style-type: none">• La Ley 546 cumplió los requisitos y etapas previstos en la constitución para su aprobación, puesto que el proyecto fue publicado oficialmente por el Congreso; se surtieron los tres debates, según lo dispuesto en los artículos 157 y 163, normas que autorizan las sesiones conjuntas de las comisiones permanentes para primer debate.• La diferencia entre lo que atañe al Congreso y al Gobierno, a la luz de los preceptos constitucionales (art. 150, numeral 19, literal d), y 335	<ul style="list-style-type: none">- Características ley marco.- Competencia del congreso-Índice UVR- Adquisición de vivienda- Financiación de vivienda a largo plazo- Banco de la República	<p>1. La Corte se declaró INHIBIDA para resolver de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 550 de 1999 por ineptitud sustancial de la demanda.</p> <p>2. Declárase EXEQUIBLE la Ley 546 de 1999, "por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los</p>

					<p>C.P.), no está señalada a partir de una discriminación por materias, se trata de los mismos asuntos -la actividad financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público-, pero la competencia está repartida entre el legislador y el Ejecutivo, según el momento en que obre cada uno respecto de los temas en cuestión</p> <ul style="list-style-type: none">• La presentación del proyecto que dio lugar a la Ley 546 por parte del Gobierno tuvo su origen en la Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, proferida por la Corte, mediante la cual fueron declaradas inexecutable todas las normas que, en el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), estructuraban el denominado sistema UPAC, o de unidades de poder adquisitivo constante, utilizado no solamente para la financiación de vivienda a largo plazo sino para otro tipo de adquisiciones de inmuebles bajo la misma modalidad crediticia• Es claro que el Congreso ha ejercido la atribución contemplada en el numeral 19, literal d), del artículo 150 de la Constitución, a cuyo tenor corresponde a la rama	<p>cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones", en cuanto, por los cargos formulados, el Congreso no incurrió en vicios de trámite.</p> <p>3. Con las excepciones previstas en esta Sentencia, declárase EXEQUIBLE la Ley 546 de 1999, en cuanto, al establecer el marco de la actividad financiera en materia de vivienda, se ajustó a las prescripciones del artículo 150,</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>legislativa "dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno" para "regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público".</p> <ul style="list-style-type: none">• Mediante las leyes "marco" el Congreso debe limitarse a expedir las normas generales, en las cuales plasme objetivos y criterios a los que habrá de sujetarse el Gobierno para regular, de manera concreta, mediante decretos, las materias previstas en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución. No puede el legislador sustituir al Ejecutivo en el desempeño de la función que a éste corresponde, y por tanto las normas específicas, de tipo administrativo, contenidas en la ley, que deberían haberse dejado a la determinación del Presidente de la República, son inconstitucionales• Deben ser "marco" los artículos que estén relacionados con la actividad financiera o de intermediación, es decir, con la operación y gestión de las instituciones financieras en lo relativo a los créditos de largo plazo para adquisición y construcción de inmuebles destinados a vivienda, y lo	<p>numeral 19, literal d) de la Constitución.</p> <p>4. Declárase EXEQUIBLE el artículo 1 de la Ley 546 de 1999, pero en el entendido de que las entidades que otorguen créditos de vivienda deben hallarse sometidas al control, vigilancia e intervención por el Estado, y de que en los préstamos que otorguen debe garantizarse la democratización del crédito y la efectividad del derecho a una vivienda digna mediante sistemas adecuados de financiación a largo plazo. Bajo cualquiera otra interpretación, se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>5. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 2 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>6. Declárase EXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 546 de 1999, salvo</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>referente a la intervención del Estado en esas actividades, pero escapan a tal concepto los artículos que resulten tan específicos que constitucionalmente correspondan a la órbita de funciones del Gobierno y los que, por su materia, estén confiados a la decisión exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha dicho la Corte que una ley del Congreso no necesariamente tiene que ser "ley marco" en su totalidad, o corresponder exclusivamente a esa clase de leyes. En un estatuto dedicado de manera predominante a una determinada materia -en este caso la vivienda- puede haber artículos que sean "marco" y otros que no lo sean, es decir que una ley no tiene que ser ciento por ciento "marco", siempre que respete el principio de unidad de materia previsto en los artículos 158 y 169 de la Constitución.• Según el artículo 372 de la Constitución, la autoridad monetaria y crediticia, es la llamada a establecer la metodología para el cálculo de la unidad de cuenta alrededor de la cual funcionará el sistema de financiación de vivienda a largo plazo, es únicamente la Junta Directiva del Banco de la República, la cual deberá hacerlo dentro de las pautas y		<p>las expresiones que a continuación se transcriben, las cuales se declaran INEXEQUIBLES:</p> <p>"...cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare a modificar la metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los contratos ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado. El Gobierno Nacional determinará la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>reglas señaladas en la ley y en las sentencias que la Corte Constitucional ha proferido sobre el tema.</p> <ul style="list-style-type: none">• La Junta Directiva del Banco de la República, en su condición de autoridad monetaria y crediticia, mediante acto motivado en que se justifique su decisión, deberá fijar la tasa máxima de interés remuneratorio que se puede cobrar por las entidades financieras en este tipo de créditos. Esta tasa máxima de interés remuneratorio será siempre inferior a la menor de todas las tasas reales que se estén cobrando en el sistema financiero, según certificación de la Superintendencia Bancaria, sin consultar factores distintos de los puntos de dichas tasas, e independientemente del objeto de cada crédito, y a la tasa menor se le deberá descontar la inflación para que no se cobre doblemente.		<p>transición de la UPAC a la UVR". La exequibilidad de este precepto se declara en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta Sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiendo exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación o aplicación, la norma se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>7. Declárase EXEQUIBLE el artículo 4 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>8. Decláranse INEXEQUIBLES, en el inciso final del artículo 6 de la Ley 546 de 1999, las expresiones "a quien le corresponderá entre sus</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>funciones, la de calcular y divulgar el valor diario de la Unidad de Valor Real".</p> <p>9. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 7 de la Ley 546 de 1999, excepto la expresión "temporal", contenida en su numeral 7, que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>La EXEQUIBILIDAD de este precepto se declara en el entendido de que las funciones confiadas al Consejo Superior de Vivienda son únicamente de asesoría.</p> <p>10. Declárase EXEQUIBLE el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, en cuanto, al expedirlo, el Congreso no invadió la órbita de funciones del Gobierno.</p> <p>11. Decláranse EXEQUIBLES los artículos 26, 27, 29,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>31, 32 y 33 de la Ley 546 de 1999, en cuanto al expedirlos, el Congreso no invadió la órbita de funciones del Gobierno ni de otro órgano del Poder Público.</p> <p>12. Decláranse EXEQUIBLES los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 546 de 1999, en cuanto, al expedirlos, el Congreso no invadió la órbita del Ejecutivo.</p> <p>13. Declárase EXEQUIBLE, con las salvedades y condicionamientos aquí previstos, el artículo 17 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>La EXEQUIBILIDAD de este precepto se declara únicamente si se lo entiende y aplica bajo las siguientes condiciones:</p> <p>-El numeral 2 sólo es EXEQUIBLE en el entendido de que la tasa de interés remuneratoria a que se refiere no incluirá el valor de la inflación, será</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria, y su máximo será determinado por la Junta Directiva del Banco de la República, conforme a lo resuelto por la Corte Constitucional, en sentencias C-481 del 7 de julio de 1999 y C-208 del 1 de marzo de 2000.</p> <p>-Una vez se comunique el presente fallo, y la Junta Directiva del Banco de la República proceda a fijar la tasa máxima de interés remuneratorio, la norma legal, con el condicionamiento que precede, se aplicará de manera obligatoria e inmediata tanto a los créditos nuevos como a los ya otorgados.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>Los créditos que se encuentren vigentes al momento de la comunicación de esta providencia y en los cuales hubieren sido pactados intereses superiores al máximo que se fije, deberán reducirse al tope máximo indicado, que será aplicable a todas las cuotas futuras.</p> <p>-Los intereses remuneratorios se calcularán sólo sobre los saldos insolutos del capital, actualizados con la inflación.</p> <p>-El numeral 6 sólo es EXEQUIBLE en el entendido de que las expresiones "primera cuota" se refieren no solamente a la primera del préstamo, sino también a la primera que se pague luego de una reestructuración del crédito, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 546 de 1999.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>-El numeral 7 se declara</p> <p>EXEQUIBLE</p> <p>únicamente si se entiende que la Superintendencia Bancaria no podrá aprobar ningún plan de amortización en materia de financiación de vivienda en cuya virtud en las cuotas mensuales sólo se paguen intereses. En todas las cuotas, desde la primera, tales planes deben contemplar amortización a capital, con el objeto de que el saldo vaya disminuyendo, sin que ello se pueda traducir en ningún caso en incremento de las cuotas que se vienen pagando, para lo cual, si es necesario, podrá ampliarse el plazo inicialmente pactado.</p> <p>-En las cuotas mensuales, si así lo quiere el deudor, se irá pagando la corrección por</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>inflación a medida que se causa. Bajo cualquiera otra interpretación, estos numerales se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>14. Declárase EXEQUIBLE el artículo 18 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>15. En los términos de esta Sentencia, declárase EXEQUIBLE el artículo 19 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>16. Declárase EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, en el entendido de que la reestructuración del crédito pedida por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada año, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la institución financiera. En caso de controversia sobre tales condiciones objetivas, decidirá la Superintendencia Bancaria. Bajo</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>cualquiera otra interpretación, el artículo se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>17. Declárase EXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>18. Declárase EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 546 de 1999, en el entendido de que también son aplicables a los constructores los condicionamientos que en este Fallo se hacen sobre la constitucionalidad del artículo 17 de la misma Ley, pagarán también los intereses más bajos, y el Gobierno, al desarrollar la Ley, deberá fijar condiciones especiales para sus créditos, en cuanto incidan en los costos de la construcción, todo lo cual deberá reflejarse en los precios de venta de las viviendas.</p> <p>19. Declárase EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 28 de la</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Ley 546 de 1999, en el entendido de que de la tasa prevista deberá deducirse la inflación y, en lo sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su patrimonio familiar, también bajo el entendido de que la tasa real de interés remuneratorio no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás créditos de vivienda.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>20. Declárase EXEQUIBLE, en lo relativo al cargo examinado, esto es, en cuanto no vulneró el artículo 338 de la Constitución, el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>21. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 38 de la Ley 546 de 1999, con excepción de las expresiones "según la equivalencia que determine el Gobierno Nacional", de su primer inciso, e "Igualmente, a elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás pasivos, en UVR o en pesos", de su parágrafo, que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>22. Declárase EXEQUIBLE el artículo 39 de la Ley 546 de 1999, con excepción de las expresiones "dentro de los tres</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>(3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, y", del parágrafo 2, que se declaran INEXEQUIBLES.</p> <p>23. En los términos de esta providencia, declárase EXEQUIBLE el artículo 40 de la Ley 546 de 1999.</p> <p>24. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 41 de la Ley 546 de 1999, y sus parágrafos 1, 2 y 3, con excepción de las expresiones "que se encuentren al día el último día hábil bancario del año 1999", del numeral 1, "que estuvieren al día el 31 de diciembre de 1999", "o en la forma que lo determine el Gobierno Nacional", del numeral 3, y "en los términos que determine el Gobierno Nacional", del parágrafo 1, que se</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>declaran</p> <p>INEXEQUIBLES.</p> <p>25. Declárase el EXEQUIBLE el artículo 42, con excepción de las frases "siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la Ley", de su inciso primero; "cumplido lo anterior", de su inciso 2; y, en el parágrafo 3, las frases "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo", y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía", que se declaran INEXEQUIBLES.
C-1161/00	Artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del decreto ley 663 de 1993 "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración	Reserva de ley marco para la expedición de las normas generales para la regulación de la actividad financiera	06-09-00	Jaime Enrique Granados Peña	ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO	<ul style="list-style-type: none">• Conforme a la Constitución, corresponde al Congreso establecer, por medio de una ley marco, las normas generales y los objetivos y criterios a que debe sujetarse el Gobierno en la regulación de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Por expreso mandato constitucional, esas disposiciones no pueden ser expedidas por decreto ley, pues en esta materia, el Congreso no puede conferir facultades extraordinarias al Presidente• Las normas acusadas no hacen parte de aquellas que tienen reserva de ley marco, puesto que ellas no definen los criterios y objetivos generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno al intervenir la actividad financiera , sino que consagran faltas y sanciones	- Delitos financieros y reserva de ley marco -Derecho sancionador -Principio de legalidad	Primero: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 52 del decreto ley 663 de 1993. Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión "de alguna ley o reglamento" contenida en el inciso primero acusado del artículo 209 del decreto ley 663 de 1993, en el entendido de que, conforme a lo señalado en los fundamentos 15, 16, 17 y 18 de esta sentencia, se trata de leyes que se refieren a la actividad de esos funcionarios en las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia

						<p>en que pueden incurrir los funcionarios o las instituciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Se trata pues de normas que son expresión del poder sancionador del Estado, y no manifestaciones de la intervención reguladora del gobierno en el sector financiero, o en actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público</p> <ul style="list-style-type: none">• Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa. Las sanciones administrativas deben entonces estar fundamentadas en la ley, por lo cual, no puede transferírsele al Gobierno una facultad abierta en esta materia, como lo hace el artículo 52 del EOSF• Constituye una carga elemental para quienes laboran en el sector financiero conocer los estatutos de la entidad en donde son directivos o empleados, así como el régimen legal especial al cual están sometidas esas instituciones. Por ello la Corte	<p>Bancaria, y que se trata de los reglamentos expedidos por el Gobierno en desarrollo de las leyes marco previstas por el artículo 150-19 literal c), y que no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las circulares o conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria.</p> <p>Tercero: Declarar EXEQUIBLE el resto del inciso primero acusado del artículo 209 del decreto ley 663 de 1993.</p> <p>Cuarto: Declarar EXEQUIBLE la expresión “reglamento” del ordinal primero del artículo 211 del decreto ley 663 de 1993, en el entendido de que se trata de los reglamentos expedidos por el Gobierno en desarrollo de las leyes marco previstas por el artículo 150-19</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>considera que la obligación que impone la norma acusada a los directivos y funcionarios de esas entidades de no realizar ni autorizar actos contrarios a los estatutos de las entidades y a las normas legales a que el establecimiento deba sujetarse, es no sólo suficientemente.</p>		<p>literal c) y que no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las circulares o conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria.</p> <p>Quinto: Declarar EXEQUIBLE el resto del ordinal primero acusado del artículo 211 del decreto ley 663 de 1993.</p>
C-1098/01	<p>Artículo primero párrafo 2° y 3°; artículo segundo párrafos 3° y 4°; artículo 61 literal f.; artículo 67 parcial y artículo 80 de la Ley 617 de 2000</p>	Fiducia pública	18-10-01	<p>Tarsicio Mora Godoy y Jaime Antonio Díaz Martínez</p>	<p>MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> La fiducia de administración y pago, no implica para la entidad territorial una pérdida de su autonomía pues ella conserva la facultad de fijar las prioridades de gasto y de ordenarlo dentro del marco del contrato celebrado. El fiduciario debe obedecer las órdenes de gasto provenientes de la autoridad competente dentro de la entidad territorial. La constitución de la fiducia encuentra sustento en por lo menos dos finalidades legítimas. Primero, porque la fiducia de administración que describe la norma acusada, reduce el riesgo que asume el garante –la 	<ul style="list-style-type: none"> Fiducia de administración y pago Acuerdo de restructuración Autonomía de entidades territoriales Actividades de control de las entidades financieras 	<p>Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD del párrafo 3° del artículo primero y del párrafo 4° del artículo segundo de la Ley 617 de 2000.</p> <p>Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal f. del artículo 61 de la Ley 617 de 2000.</p> <p>Tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 67 de la Ley 617 de 2000, en la parte demandada, bajo el entendido de que el control atribuido a las entidades financieras sólo comprende</p>

						<p>Nación– respecto de los créditos que adquieran las entidades territoriales con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y cuyo pago ella garantiza. Segundo, porque la garantía otorgada por la Nación – bajo la condición de que se constituyera por parte de las entidades territoriales una fiducia adecuada para proteger el patrimonio nacional–, era necesaria para que las entidades financieras aceptaran ser acreedoras de unas entidades territoriales que, de no contar con la garantía de la Nación, difícilmente podrían ser destinatarias de crédito por parte de las instituciones financieras y, en especial, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria, tal como lo exige la norma</p> <ul style="list-style-type: none">• Las entidades financieras sólo pueden realizar las actividades de control inherentes a su condición de acreedoras. Pero las actividades que pueden realizar en tal condición, tienen un alcance notoriamente superior a las que pueden realizar respecto de las deudas a		<p>acceder a información respecto del cumplimiento de los acuerdos de reestructuración por parte de las entidades territoriales, con el consecuente deber de comunicar a las autoridades competentes acerca de los incumplimientos identificados.</p> <p>Cuarto.- Declararse INHIBIDA para proferir fallo de fondo respecto de la exequibilidad del artículo 80 de la Ley 617 de 2000.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

						<p>su favor. Es decir, las entidades territoriales tienen acceso permanente a la información sobre la situación financiera de las entidades territoriales deudoras –y no sólo en el momento de celebrar el contrato o cuando se presente un incumplimiento por parte del deudor–, con miras a establecer si gozan de las condiciones necesarias para atender las obligaciones surgidas del acuerdo de reestructuración.</p> <ul style="list-style-type: none">Las entidades financieras sólo pueden acceder a la información sobre el cumplimiento del acuerdo de reestructuración, pues no disponen de la facultad de dar órdenes ni de imponer sanciones y, en caso de detectar algún incumplimiento por parte de las entidades territoriales respecto de los acuerdos de reestructuración, deben informar a las autoridades competentes.		
T-588/02	Acción de tutela de Carlos Arturo Valencia Cano contra el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero	Fiducia Publica/ Crédito de Fomento	01/08/2002	Carlos Arturo Valencia Cano	Jaime Córdoba Triviño	<ul style="list-style-type: none">En esta acción de tutela estamos ante el contexto de que Carlos Arturo Valencia Cano le solicito al Fondo para la Reconstrucción del Eje cafetero, un subsidio directo para no	<ul style="list-style-type: none">- Acción de tutela-Subsidios- Fondo fiduciario-Propietarios/poseedores	Primero. No tutelar los derechos a la igualdad, a la vivienda digna, a la igualdad y de petición al actor

						<p>propietarios para compra de vivienda usada. Esta entidad estaba encargada de administrar y autorizar los respectivos subsidios bajo unas condiciones con destino a la reconstrucción, reubicación y reparación de vivienda con ocasión del terremoto.</p> <ul style="list-style-type: none">• “Por medio del Decreto 350 del 25 de febrero de 1999 se dispuso que el Forec destinará parte de sus recursos a la constitución de un fondo fiduciario administrado a través de uno o varios contratos fiduciarios para estimular el otorgamiento de subsidios a la demanda de inmuebles y se lo facultó entre otras cosas para otorgar subsidios que faciliten a los propietarios o poseedores de los inmuebles afectados el pago de la cuota inicial que pudieran requerir para la adquisición de un inmueble. Posteriormente estos subsidios se ampliaron a las familias afectadas no propietarias o no poseedoras.”• Conforme a lo anterior, la Sala establece que el acto administrativo por medio del cual al actor se le negó el subsidio es un acto legítimo. Esto se debe	<p>Carlos Arturo Valencia Cano.</p> <p>Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 29 de enero de 2002 por el Tribunal Administrativo del Quindío y la sentencia proferida el 14 de marzo de 2002 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.</p> <p>Tercero. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.</p> <p>Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						porque se estaba habilitado para emitir dicho acto, pues, se basó en hechos demostrados con un fundamento normativo que permitió negar ese subsidio. En este caso ese sustento que impide prosperar la tutela es que una de las personas del núcleo familiar tenía una propiedad y por lo tanto no calificaba entre los requisitos para obtener dicho subsidio.		
C-983/02	Artículos 62, 432 y 1504 (parciales) del Código Civil en lo concerniente a la incapacidad que tiene los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.	Incapacidad de sordomudos que no pueden darse a entender por escrito .	13-11-2002	Alonso Valencia Salazar	Jaime Córdoba Triviño.	<p>En relación a la incapacidad absoluta que adolecen los sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito, <i>“El impugnante se pregunta hasta dónde es digna y justa una sociedad en la que se impide a quienes están limitados de voz y oído representarse a sí mismos porque el único medio permitido para darse a entender es el escrito”</i>.</p> <p><i>“La Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado, entre otros, en el respeto a la dignidad humana; y dispone que dentro de sus fines está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta.”</i></p>	<p>-Capacidad. -Incapacidad absoluta. -Sordomudos. -Discapacitados. -Sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. -Derecho a la igualdad. -Derecho al libre desarrollo de la personalidad.</p>	<p>“Los artículos acusados reconocen capacidad sólo a los discapacitados que puedan darse a entender por escrito. Estas disposiciones resultan sin lugar a dudas discriminatorias, en cuanto excluyen sin razón justificada a aquellas personas que pueden comunicarse mediante señas u otra forma de lenguaje, pero desconocen la</p>

					<p>En ese sentido...</p> <p><i>“El Estado tiene el deber de promover las condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva y para ello debe adoptar medidas que favorezcan a grupos discriminados o marginados, y brindar una protección especial para aquellas personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Así lo dispone el artículo 13 de la Carta Política.”</i></p> <p>Teniendo en cuenta los postulados del estado social de derecho, el mandato constitucional sobre la igualdad material y no meramente formal y además la reforzada protección constitucional e internacional que poseen los discapacitados. La H. Corte considera:</p> <p>Si bien la voluntad de una persona debe ser exteriorizada, es decir, no debe quedarse en su fuero interno sino que debe trascender de este. Dicha exteriorización no solo puede hacerse mediante el habla o la escritura sino por cualquier medio <i>“que demuestre de manera clara, inequívoca e inteligible lo que se expresa”</i>.</p> <p><i>“De acuerdo con los conceptos de los expertos, las personas sordas y mudas, salvo aquellas que padecen además retardo mental o alguna alteración cerebral, tienen</i></p>	<p>escritura.”</p> <p>Declarar EXEQUIBLE la palabra “sordomudo” contenida en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, e INEXEQUIBLE la expresión “por escrito” contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo Código.</p> <p>Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y tuviere suficiente inteligencia”, contenida en el artículo 560 del Código Civil.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p><i>un índice intelectual igual que las oyentes y, por contera, será diferente de acuerdo con el desarrollo potencial de cada individuo. El hecho de que no puedan escuchar ni expresarse verbalmente, no implica necesariamente que no piensen, que no sientan, ni tengan la facultad de discernir o de adoptar decisiones y comprometerse en el mundo jurídico.”</i></p> <p><i>Así, “El lenguaje utilizado por esa comunidad es diferente al del resto de la población, pero no por ello es ininteligible e indescifrable. Por el simple hecho de que ese lenguaje no sea el oral, utilizado por el resto de las personas, no pueden adoptarse medidas que los aparten, los segreguen del mundo jurídico y se les considere, entonces, absolutamente incapaces.”</i></p> <p>En dicho entendido, si dichas personas pueden darse a entender a través de cualquier forma del lenguaje que permita una comunicación clara, expresa, precisa e inequívoca, sus actos deben tener plena eficacia jurídica sin que para su valoración el juez deba prescindir de interpretes ya que este ultimo no esta obligado a conocer dicho lenguaje.</p> <p><i>“Los artículos acusados reconocen capacidad sólo a los discapacitados que puedan</i></p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p><i>darse a entender por escrito. Estas disposiciones resultan sin lugar a dudas discriminatorias, en cuanto excluyen sin razón justificada a aquellas personas que pueden comunicarse mediante señas u otra forma de lenguaje, pero desconocen la escritura.”</i></p> <p><i>“En segundo lugar, para la Sala resulta violatorio de la Constitución la frase “y tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma concepción discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión choca con el principio constitucional sobre la no discriminación y con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos. Dicha frase, entonces, será también retirada del ordenamiento jurídico”. Máxime cuando estudios revelan que no hay ningún nexo de causalidad entre la discapacidad oral y/o auditiva con el desarrollo cognitivo del discapacitado.</i></p>		
T-587/03	Solicita declarar la existencia de violación	Solicita declarar la existencia de	17/08/2003	Sociedad Hoteles	Marco Gerardo Monroy Cabra	<ul style="list-style-type: none">• En primer lugar es necesario precisar que la	-Fideicometidos -Fiduciante	1. CONFIRMAR, pero por las

	<p>al “debido proceso o principio de legalidad” y, por tanto, ordenar excluir a Bancolombia S.A. del proceso fiduciario en ejecución de garantía inmobiliaria que adelanta Fiducolombia S.A. contra Hodecol S.A., por incumplimiento del contrato que para sí invoca y falta de demostración de documento en que conste la obligación.</p>	<p>violación al “debido proceso o principio de legalidad” y, por tanto, ordenar excluir a Bancolombia S.A. del proceso fiduciario en ejecución de garantía inmobiliaria que adelanta Fiducolombia S.A. contra Hodecol S.A., por incumplimiento del contrato que para sí invoca y falta de demostración de documento en que conste la obligación.</p>		<p>Decamerón Colombia S.A.</p>		<p>procedencia de la acción de tutela contra particulares es excepcional. Se ha concluido que procede la tutela contra entidades bancarias debido a que prestan un servicio público. Se señala que debe existir una posición dominante sobre el usuario generando un escenario de desigualdades.</p> <ul style="list-style-type: none">• A su vez se establece como improcedente la tutela para el pago de obligaciones generadas por un contrato, para determinar el alcance correcto de cláusulas contractuales, no puede el juez de tutela salirse de su competencia para entrar a competencia de los jueces ordinarios.• Conforme a lo anterior, si bien se ha dicho que la tutela no procede para el conocimiento de controversia originadas de un contrato, se establece como excepción, cuando la falta de pago origina un grave perjuicio al mínimo vital del accionante.• “En el presente caso, la Sala Sexta de Revisión declarará improcedente la tutela en estudio por encontrar que (i) ni Fiducolombia ni	<p>-Fiducia mercantil -Representación -Ocupación de hecho -Restitución -Proceso de querellados -Legitimación por activa -Proceso policivo</p>	<p>razones expuestas en este pronunciamiento, la sentencia de primera instancia proferida el 10 de septiembre de 2002 por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá y revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2002 por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá.</p> <p>2. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de XXX en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho promovido en su contra. ANULAR ese proceso a partir de la sentencia de segunda instancia proferida el 30 de mayo de 2002 por la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá y ordenar a esa autoridad de policía que, en las 48 horas siguientes a la notificación de</p>
--	--	--	--	--------------------------------	--	---	---	--

						Bancolombia pueden ser sujetos pasivos de la presente tutela, pues son entidades que no se encuentran bajo ninguno de los supuestos excepcionales de procedencia de la tutela contra particulares y (ii) nos encontramos frente a una discusión de tipo puramente contractual que no involucra la eventual vulneración de ningún derecho fundamental, la cual debe ser resuelta por el juez ordinario competente.”		este pronunciamiento, profiera una sentencia con estricto apego a la Constitución y a la ley. 3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
C-123/06	Artículos 24, incisos 3 y 4 (parcial), y 171 de la Ley 222 de 1995; y artículos 2, numerales 28 y 29, y 9, numerales 7 y 14 del Decreto 1080 de 1996	Responsabilidad de los administradores de sociedades comerciales	22-02-06	Giovanna Alejandra Rey Anaya y Carlos Alberto Colmenares Uribe	CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ	<ul style="list-style-type: none">• En materia de sociedades, dada la importante labor que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión que sus actuaciones pueden tener en el desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al	<ul style="list-style-type: none">- Presunción legal- Derecho de defensa- Superintendencia de sociedades- Remoción de liquidador en proceso concursal	PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES , por los cargos analizados, el inciso tercero y la expresión “se presumirá la culpa” del inciso cuarto, del artículo 24 de la Ley 222 de 1995. SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLES , por los cargos analizados y conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, el inciso segundo del artículo 171 de la Ley 222 de 1995

						<p>cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad.</p> <ul style="list-style-type: none">• El legislador consagró la presunción de culpa del administrador solamente para cuando ésta se origine por incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, y para cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas correspondientes• Las presunciones son un procedimiento de técnica jurídica acogido por el legislador en ejercicio de la libertad de configuración normativa de las instituciones procesales, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos. La libertad de configuración no es absoluta en la medida que se encuentra sujeto a los valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. la Corte ha señalado que para que una presunción legal resulte constitucional es menester que sea razonable “es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y	<p>TERCERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de los incisos primero y tercero del artículo 171 de la Ley 222 de 1995.</p> <p>CUARTO. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-180 de 1997, que declaró exequible la expresión “y demás procedimientos mercantiles”, contenida en el numeral 14 del artículo 9 del Decreto 1080 de 1996.</p> <p>QUINTO. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los numerales 28 y 29 del artículo 2º, y numerales 7 y 14 (salvo la expresión prevista en el numeral anterior) del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el mencionado fin”.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estas presunciones simplemente legales en principio, no son violatorias del debido proceso, ni en particular de la presunción de inocencia, pues para la garantía del debido proceso se permite la presentación de descargos a fin de permitir la demostración de la no existencia de culpabilidad y salvaguardar igualmente la dignidad humana• El término de traslado por cinco 5 días concedido al liquidador, cuando se pretende su remoción, bien de oficio o a petición de la junta asesora, no resulta irrazonable ni desconoce la garantía del derecho de defensa, en la medida que le permite a éste contar con el tiempo suficiente y oportuno para contradecir los cargos que por incumplimiento grave de sus funciones se le atribuyen. Debe entenderse que una vez vencido el término de cinco (5) días previsto para el traslado al liquidador, la Superintendencia de Sociedades decretará y practicará en un término de diez (10) días las pruebas que el liquidador solicite o aquella que considere de oficio, vencido el cual, decidirá el asunto.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<ul style="list-style-type: none">• Para la Corte el Presidente de la República no excedió las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 226 de la Ley 222 de 1995, que entrega a la Superintendencia de Sociedades la atribución para: (i) interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades sobre las cuales ejercer inspección, vigilancia o control; y, (ii) imponer multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales cada una, a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia, quebranten las Leyes o sus propios estatutos, respetando el derecho de defensa y el debido proceso. Con estas funciones, el legislador extraordinario no modificó, adicionó o suprimió las entregadas al ente administrativo por la ley, pues por el contrario, éstas son una mera copia de las ya establecidas en la Ley 222 de 1995, artículo 86 numerales 3 y 4.		
C-243/06	Artículo 25, parcial, de la Ley 100 de 1993.	Fiducia pública	29-03-06	Carlos Arturo Hurtado Vélez	CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ	<ul style="list-style-type: none">• Los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional están conformados por las cotizaciones efectuadas por los afiliados al Sistema General de Pensiones, y	<ul style="list-style-type: none">- Presunción legal- Derecho de defensa- Superintendencia de sociedades- Remoción de liquidador en proceso concursal	PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES , por los cargos analizados, el inciso tercero y la

						<p>además, por otros recursos como son los previstos en la Subcuenta de Solidaridad, como los aportes de las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados; las donaciones, rendimientos financieros de recursos y demás recursos que reciba a cualquier título; y las multas a que refieren los artículos 111 y 271 de la ley 100 de 1993. Y, respecto de la Subcuenta de Subsistencia por los aportes del presupuesto nacional</p> <ul style="list-style-type: none">• La norma acusada dispone la creación del Fondo de Solidaridad Pensional como “una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social”. Por ello, la ley de seguridad social prevé que los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran.• La libertad de empresa, ha sido definida por la Corte como aquella libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las		<p>expresión“se presumirá la culpa”del inciso cuarto, del artículo 24 de la Ley 222 de 1995.</p> <p>SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados y conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, el inciso segundo del artículo 171 de la Ley 222 de 1995</p> <p>TERCERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de los incisos primero y tercero del artículo 171 de la Ley 222 de 1995.</p> <p>CUARTO. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-180 de 1997, que declaró exequible la expresión “y demás procedimientos mercantiles”, contenida en el numeral 14 del artículo 9 del Decreto 1080 de 1996.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. Esta libertad le otorga a toda persona el derecho de ejercer y desarrollar una determinada actividad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización institucional que en nuestro país lo es la economía de mercado. Sin embargo ésta libertad no es absoluta, ya que el legislador está facultado para limitar o restringir su alcance cuando así lo exijan "el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". Dichas limitaciones deben atender fines constitucionales, obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía, obedecer al principio de solidaridad, no ser de tal magnitud que hagan nugatorio el derecho, y ser razonables y proporcionadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• La decisión de entregar la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional a las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, hace	<p>QUINTO. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los numerales 28 y 29 del artículo 2º, y numerales 7 y 14 (salvo la expresión prevista en el numeral anterior) del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>parte del margen de configuración normativa que corresponde al legislador para el diseño del Sistema General de Pensiones, y en virtud de los principios de solidaridad y universalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución.</p> <ul style="list-style-type: none">• Al disponer el legislador que la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional no la hiciera cualquier persona sino que ésta se hiciera por ciertas sociedades, no excluyó de plano a las sociedades fiduciarias de naturaleza privadas. En efecto, si bien el legislador consideró que la administración de los recursos del Fondo lo hicieran sociedades fiduciarias de naturaleza pública, también dispuso que éstos podían ser administrados preferencialmente por sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario.		
T-700/06		Reincorporación y reintegro laboral	22-08-06	Gloria Julia Aristizabal	MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA	<ul style="list-style-type: none">• Teniendo en cuenta que una de las características esenciales de la tutela es la inmediatez, la Corte ha señalado que esta figura ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad	<ul style="list-style-type: none">- Procedencia de la acción de tutela- Protección laboral reforzada- Protección a la mujer- Reincorporación laboral- Reintegro laboral	Primero.- REVOCAR el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y en su lugar conceder de manera transitoria la protección

						<p>concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza</p> <ul style="list-style-type: none">• La acción de tutela fue consagrada por el Constituyente como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales, que no pretende desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias• El mismo Constituyente introdujo una excepción a dicha regla, en el citado artículo 86 Superior, a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, es procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable• La protección a la mujer por su especial condición de madre cabeza de familia es de origen supralegal, la cual se desprende no solamente de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, sino también de la especial protección contenida expresamente en el artículo 43 que determina la obligación del Estado de apoyarlas de manera especial, en consideración a la difícil		<p>constitucional a la señora Gloria Julia Aristizabal Monsalve como madre cabeza de familia y adicionalmente, amparar su derecho fundamental al debido proceso.</p> <p>Segundo.-</p> <p>ORDENAR a la E.S.E. Metrosalud, que dentro de los cinco (5) días siguientes a notificación de la presente providencia, informe por escrito a la señora Gloria Julia Aristizabal Monsalve, el derecho que le asiste de optar por la reincorporación a un empleo de carrera igual o equivalente al suprimido o por percibir la indemnización a que haya lugar, conforme a los postulados legales.</p> <p>En el evento en que la accionante opte por la reincorporación, mientras</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>situación a la que deben enfrentarse al asumir de forma solitaria las tareas de crianza y de sostenimiento de sus menores hijos</p> <ul style="list-style-type: none">• La protección laboral reforzada para la señora Gloria Julia Aristizabal Monsalve en su condición de madre cabeza de familia y discapacitada debió haber sido tomada en cuenta por la E.S.E. Metrosalud, en el proceso de supresión de los cargos de la Unidad de Saneamiento Ambiental dentro de la cual se encontraba ubicado el cargo de Promotor de Saneamiento que ocupaba la accionante.• La ley 909 de 2004 diferencia la figura de la incorporación de la reincorporación, como opciones a las que tiene derecho un funcionario inscrito en la carrera administrativa al que se le suprima el cargo, indicando que el efecto de la incorporación es inmediato y debe darse en la misma entidad, mientras que para la reincorporación se tendrán en cuenta las reglas del procedimiento estipulado en el Título VI del decreto - ley 760 de 2005• En caso de no ser posible la reincorporación, ya sea porque no sea la opción elegida por la peticionaria o bien porque no reúna las exigencias previstas en la ley, o en caso de no producirse el		<p>transcurre el término legal para efectuarla o se presenta la vacante del cargo de carrera que deba ocupar conforme a las reglas establecidas en las normas, la E.S.E. Metrosalud deberá reintegrar a la accionante, si ella así lo desea, dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de aceptación que la peticionaria envíe a la entidad, al cargo de Radioperador o Técnico Auxiliar de Equipo de Radio que se encontraba desempeñando en comisión al momento de su desvinculación, con la remuneración que ese cargo tenga asignada al momento de la aceptación de tal opción. En caso de no ser posible la reincorporación en los términos previstos en la ley,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>reintegro por voluntad de la accionante al cargo de Radioperador o Técnico Auxiliar de Equipo de Radio, la E.S.E. Metrosalud deberá iniciar las gestiones necesarias para proceder al pago de la indemnización respectiva en los términos de la ley.</p>		<p>o en caso de no producirse el reintegro por voluntad de la accionante al cargo de Radioperador o Técnico Auxiliar de Equipo de Radio, la E.S.E. Metrosalud deberá iniciar las gestiones necesarias para proceder al pago de la indemnización respectiva en los términos de la ley.</p> <p>Tercero.- Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, notificará la presente providencia dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación de que trata el numeral anterior.</p> <p>Cuarto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

								fines allí contemplados.
c-1011/08	Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado)	Habeas data	16-10-08	Revisión de constitucionalidad	JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO	<ul style="list-style-type: none">• El proyecto de ley estatutaria objeto de examen constituye una regulación parcial del derecho fundamental al hábeas data, concentrada en las reglas para la administración de datos personales de carácter financiero destinados al cálculo del riesgo crediticio, por lo cual no puede considerarse como un régimen jurídico que regule, en su integridad, el derecho al hábeas data. Este derecho es comprendido como la facultad que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada• A partir de un criterio de entendimiento sistemático de la normatividad, se tiene que su única interpretación plausible es la de considerarla como un régimen jurídico sobre la administración de datos personales con un carácter particular, esto es, de naturaleza financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países con idéntica naturaleza• Entre las materias que el artículo 152 de la Constitución establece que deben regularse a través de leyes estatutarias,	<ul style="list-style-type: none">- Ley estatutaria- Habeas data crediticio- Riesgo crediticio- Principios de la administración de datos personales- Información privada, semiprivada y reservada	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por su aspecto formal, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado) “por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el</p>

						<p>se encuentran los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Es a través de las leyes estatutarias que el legislador cumple un propósito de integrar, perfeccionar regular y complementar normas sobre derechos fundamentales, que apunten a su adecuado goce y disfrute; y por otro lado, el de establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos frente a los eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de proporcionalidad, pueda establecer el legislador</p> <ul style="list-style-type: none">• El inusitado auge de la administración automatizada de datos personales ofrece retos de primer orden para la vigencia de los derechos fundamentales en el Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la dignidad humana y la democracia pluralista• Hábeas data financiero es el derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero. Este derecho confiere un grupo de		<p>artículo 3º del Proyecto de Ley objeto de revisión, en el entendido que respecto a lo previsto en el literal c) de este artículo, el operador es responsable a partir de la recepción del dato suministrado por la fuente, por el incumplimiento de los deberes de diligencia y cuidado en relación con la calidad de la información personal, consagrados en esta Ley Estatutaria. Esta declaratoria de exequibilidad operará salvo la expresión “así como la información relativa a las demás actividades propias del sector financiero o sobre el manejo financiero o los estados financieros del titular”, contenida en el literal j) del artículo 3º del Proyecto de Ley Estatutaria,</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

					<p>facultades al individuo para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información que de sí mismo ha sido recopilada por una central de información.</p> <ul style="list-style-type: none">• La jurisprudencia ha contemplado que la protección efectiva de los derechos fundamentales interferidos en las actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos personales, en especial el hábeas data, la intimidad y la información, depende la formulación de un grupo de principios para la administración de datos personales, todos ellos destinados a crear fórmulas armónicas de regulación que permitan la satisfacción equitativa de los derechos de los titulares, fuentes de información, operadores de bases de datos y usuarios• Estas prerrogativas alcanzan concreción a partir de los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad. La fijación de estos principios no es incompatible con la posibilidad que se prediquen, a partir de normas constitucionales y legales, otros deberes a los titulares, fuentes, administradores y usuarios de la información personal, como	<p>que se declara INEXEQUIBLE.</p> <p>Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 5º del Proyecto de Ley objeto de revisión, en el entendido que respecto a lo previsto en el literal d) de este artículo, las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando acceden al dato personal, quedan sometidas a los deberes y responsabilidades previstos por la Ley Estatutaria para los usuarios de la información.</p> <p>Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Proyecto de Ley objeto de revisión, en el entendido que respecto a lo previsto en el numeral 2.1. de este artículo, la fuente tiene la obligación de informar a los titulares los datos que suministra al operador, para los fines previstos en el inciso 2º del</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>es el caso de una obligación de diligencia y seguridad en el manejo de los datos personales y la obligación de indemnizar por los perjuicios causados en razón de las actuaciones u omisiones que violen los requisitos para la información personal antes enunciados</p> <ul style="list-style-type: none">• La división de los datos personales con base en un carácter cualitativo y según el mayor o menor grado en que pueden ser divulgados:<ul style="list-style-type: none">✓ La información semiprivada es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación.✓ La información privada es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, sólo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones. Entre dicha información se encuentran los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón a la inspección de domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos	<p>artículo 12 de la Ley Estatutaria.</p> <p>Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 13 del Proyecto de Ley objeto de revisión, en el entendido que la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos años, no podrá exceder el doble de la mora, y que el término de permanencia de cuatro años también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por cualquier modo.</p> <p>Séptimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 del Proyecto de Ley, en el entendido que las expresiones “reporte negativo” y “reporte positivo” de los literales a. y b. hacen referencia exclusivamente al cumplimiento o incumplimiento de la obligación, y que el reporte deberá contener la información histórica, integral, objetiva y veraz del</p>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>penales sujetas a reserva, entre otros.</p> <p>✓ Por último se encuentra la información reservada, eso es, aquella que sólo interesa al titular en razón a que está estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, la intimidad y la libertad; como es el caso de los datos sobre la preferencia sexual de las personas, su credo ideológico o político, su información genética, sus hábitos, etc.</p> <p>El establecimiento de estas tipologías se muestra útil, en la medida en que permite diferenciar los datos que pueden ser objeto de libre divulgación en razón al ejercicio del derecho fundamental a la información, a la vez que contribuye a la delimitación e identificación de las personas que se encuentran constitucionalmente facultadas para el acceso a los diferentes tipos de información</p> <ul style="list-style-type: none">• El régimen de protección del derecho al hábeas data en el constitucionalismo colombiano, no sólo es plenamente compatible con las consideraciones que al respecto ofrece el sistema universal de protección de los derechos humanos, sino que, inclusive, prevé un conjunto de		<p>comportamiento crediticio del titular.</p> <p>Octavo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 17 del Proyecto de Ley objeto de revisión, en el entendido que las Superintendencias, en todo caso, deben actuar con independencia y autonomía en su función de vigilancia.</p> <p>Noveno.- ENVIAR copia auténtica de esta sentencia a los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para su conocimiento, y con el fin de que remitan al Presidente de la República el texto del proyecto de ley, para los efectos del correspondiente trámite constitucional.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

						<p>garantías a favor del sujeto concernido de un carácter más amplio, basado en la existencia de un derecho fundamental autónomo, distinguibles de otras garantías, como la intimidad y el buen nombre, y un conjunto de principios de administración personal que le son predicables.</p> <ul style="list-style-type: none">• El adecuado cálculo del riesgo crediticio es un aspecto importante para la protección de los recursos de intermediación y, por ende, del sistema financiero en su conjunto. Si se parte de la base que los recursos utilizados para las actividades del sector financiero se obtienen del ahorro de los ciudadanos, entonces resulta válido, desde la perspectiva constitucional, que se efectúen acciones destinadas a evitar que tales recursos se dilapiden y, en últimas, a satisfacer el interés público representado en las actividades de intermediación financiera• Resulta claro, que la administración de datos personales sobre comportamiento crediticio es una actividad necesaria, a efectos de proteger el ahorro público y satisfacer los intereses del tráfico mercantil, actividades que no se oponen a los postulados constitucionales.	
--	--	--	--	--	--	--	--

T-910/09	La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia proferida el 6 marzo de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda en el proceso de la referencia.	Garantía fiduciaria	07/12/2009	Jaime Gilinski Bacal	Nilson Pinilla	<ul style="list-style-type: none">• Entra la sala a analizar las resoluciones número 01 de 24 de septiembre de 1999 que negó a los actores la reclamación del derecho sobre el cupo 307 (apartamento) argumentando que no tenían titularidad como fideicomitente, inversionista adherente o beneficiario sobre el derecho reclamado. Y a su vez se analiza la 0047 de 8 de septiembre de 2000 por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por los actores confirmando lo dicho anteriormente.• De ahí que la sala debe identificar cual es la relación jurídica de los demandantes en virtud del contrato de promesa de cesión del derecho de fideicomitente inversionista que celebraron con Alfredo Muñoz Construcciones S.A., y si como consecuencia de ese contrato tienen título para que se les pueda reconocer la condición de fideicomitentes respecto al cupo 307.• Luego de analizar varios artículos que regulan el contrato de promesa de cesión la corte concluye que se puede inferir que la	<ul style="list-style-type: none">- Contrato de cesión- Promesa de cesión- Fideicomitente- Fideicomisario- Escritura pública- Negocio jurídico- Cesionario- Cedente- Contrato de promesa	<p>1.- CONFIRMASE la sentencia apelada, de 6 marzo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda en el proceso de la referencia.</p> <p>2.- Se reconoce a la abogada Gloria Lucía Cabieles Caro como apoderada del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, en los términos y para los fines conferidos en el poder que obra a folio 85 de este cuaderno. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la</p>
----------	--	---------------------	------------	----------------------	----------------	--	--	---

						<p>cesión de una posición de fideicomitente inversionista debe constar por escrito, tal como nace el derecho o la posición objeto de la cesión, pues el cesionario inversionista pasa a sustituir al fideicomitente inversionista en la posición cedida, en sus derechos y obligaciones dentro del fideicomiso.</p> <ul style="list-style-type: none">• De aquí que se concluye que solo cuando consta por escrito y ha sido firmado por las partes interesadas, el cedente, el cesionario y la fiduciaria, se puede decir que hubo una cesión de la posición en el contrato o que trate en el fideicomiso.• “En este caso, tal como se acepta por las partes y consta en autos, el contrato de cesión no llegó a celebrarse, pues el cedente, no suscribió el contrato luego los actores no lograron sustituir al fideicomitente inversionista en la posición prometida en cesión, la 307, de modo que los únicos derechos que les asisten son los que se deriven de la promesa de contrato de cesión, en relación con los dineros	Sala en su sesión de 3 de julio de 2008
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>entregados por causa de la misma”</p> <ul style="list-style-type: none">• En lo que atañe precisamente a la procedencia de la tutela en el presente caso, se ha aducido la existencia de circunstancias de subordinación o de indefensión del accionante respecto de la entidad accionada, eventos expresamente previstos por el numeral 4° del citado artículo 42. A efectos de dilucidar este asunto, y de cara a la argumentación del actor, la Sala deberá entonces volver sobre aspectos particulares de la situación fáctica planteada.• En el caso que ocupa la atención de la Sala, y teniendo en cuenta las públicamente conocidas circunstancias personales y comerciales del cliente que en este caso obra como accionante, así como las del negocio que le vincula con la fiduciaria demandada, no se aprecia una situación de desequilibrio como la que es usual encontrar, por ejemplo, entre los bancos y sus deudores. Por el contrario, en este caso se trata de un sujeto plenamente hábil, tanto en sentido legal como	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>material, en capacidad de desplegar una activa defensa que le permita afrontar con todos los instrumentos jurídicos disponibles el incumplimiento contractual de que podría ser objeto, mientras que la relación jurídica analizada es un negocio que involucra cuantiosos intereses económicos de varios sujetos en relativo equilibrio negocial entre sí y frente a la entidad fiduciaria, todo lo cual desvirtúa la posible existencia de una posición preeminente o la existencia de subordinación o indefensión en perjuicio del accionante.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se observa que el caso es un típico conflicto de derecho privado y de contenido patrimonial, para cuya resolución existen otras acciones judiciales efectivas a través de las cuales podría, de ser procedente, obtenerse lo que en este caso pretende el actor, y dado que no se observa una situación de subordinación o indefensión, ni ningún otro aspecto de evidente relevancia constitucional que justifique el análisis en	
--	--	--	--	--	--	---	--

						sede de tutela del reclamo planteado por el accionante, concluye la Sala que esta acción es claramente improcedente.		
C-244 de 2011	Revisión de constitucionalidad del Decreto 4832 del 29 de diciembre de 2010 "Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica nacional"	Contrato de Fiducia Publica y Contrato de Fiducia Mercantil/ Control de Constitucionalidad	04/04/2011	Iniciativa Presidencia de la Republica	Juan Carlos Henao Pérez	<ul style="list-style-type: none"> En esta oportunidad le corresponde a esta Corporación resolver si las disposiciones contenidas en el Decreto 4832 de 2010, promulgado por el Presidente de la República en virtud de la emergencia social, económica y ecológica declarada por medio del Decreto 4580 de 2010, se ajustan a la Constitución y a la Ley estatutaria que regula los estados de excepción (Ley 137 de 1994). Primero se debe establecer el principal objetivo de creación del Fondo, el cual fue el de consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos destinados a vivienda de interés social. Para el manejo y administración de estos recursos, se le otorgó al Fondo la facultad de 	<ul style="list-style-type: none"> Patrimonio autónomo Calamidades sociales, económicas y políticas Facultad extraordinaria Fiducia mercantil Fiducia Publica Bienes fiscales Insinuación 	<p>Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo PRIMERO del Decreto 4832 de 2010, bajo el entendido que las funciones señaladas a Fonvivienda en los numerales 1 a 6, sólo tendrán vigencia hasta el año 2014, para la ejecución de todas las fases concebidas por el Gobierno Nacional.</p> <p>Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo SEGUNDO del Decreto 4832 de 2010, bajo el entendido que lo allí establecido sólo se mantendrá hasta el año 2014.</p> <p>Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo TERCERO del Decreto 4832 de 2010, bajo el entendido que la autorización allí prevista sólo se</p>

						<p>celebrar contratos de fiducia, encargo fiduciario, fondos fiduciarios, de mandato; convenios de administración y demás negocios jurídicos que fueran necesarios, cuyos costos de administración se atenderían con cargo a las respectivas apropiaciones de inversión. Así, al asimilarse a un establecimiento público del orden nacional los contratos de Fonvivienda se encuentran sujetos al régimen de contratación estatal.</p> <ul style="list-style-type: none">• Es necesario manifestar las facultades del Fondo para ver la relevancia de las fiducias. Se faculta al Fondo para:• celebrar contratos de fiducia mercantil en forma directa (ii) con el fin de ejecutar proyectos de vivienda de interés social y proyectos integrales de desarrollo urbano – elaboración de estudios para la estructuración técnica y económica, preinversión, inversión y ejecución –construcción– (iii) regidos bajo las normas del derecho privado,• ejercer a través de patrimonios autónomos o directamente, atribuciones	mantendrá hasta el año 2014.
--	--	--	--	--	--	---	------------------------------

						<p>que tienen como propósito acelerar la aplicación de subsidios, de forma que los giros entren directamente a financiar la ejecución de obras y construcciones, agilizar el proceso de elección y adquisición de terrenos de carácter prioritario para el interés social, así como de los materiales de construcción y con tal fin (v) se autoriza a las entidades públicas para trasladar bienes fiscales y recursos a los citados patrimonios autónomos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Por medio del artículo 2º del Decreto 4832 de 2010 se faculta a Fonvivienda para celebrar directamente contratos de fiducia mercantil sin acudir al proceso de licitación pública y a que tales contratos se rijan por las normas de derecho privado de forma que no estén sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.• Se ajusta al presupuesto de la necesidad pues a que lo procesos de licitación pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura no garantizan la inmediatez	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>requerida para esta situación.</p> <ul style="list-style-type: none">• De lo anterior que se autoriza a concluir la necesidad de usar mecanismos legales disponibles que garanticen celeridad, con total apego y confianza en que las instrucciones dadas por el Fondo, en calidad de fideicomitente, deben ser claras e inequívocas en relación con la destinación de los bienes y recursos transferidos, así como en cuanto a las actividades y obras a ejecutar.• Fonvienda deberá garantizar la solvencia e idoneidad de las personas a quienes entregue bienes y recursos de origen público para el desarrollo del negocio fiduciario, en punto a evitar que la decisión de inversión quede al arbitrio de la sociedad fiduciaria.• Respecto a el artículo tercero del Decreto 4832 de 2010 se debe aclarar que el hecho de que el patrimonio autónomo que se constituya carezca de personalidad jurídica no significa que frente a éste no se encuentre una persona que intervenga y afronte justamente las relaciones jurídicas que	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>demanda el cumplimiento de la finalidad prevista por el Estado en su condición de constituyente o fideicomitente.</p> <ul style="list-style-type: none">• De allí que Fonvivienda será en todo caso responsable frente a los entes de control por el contenido del contrato fiduciario respecto de sus límites, alcances, reservas y ejecución por el solo hecho de encontrarse involucrados recursos públicos y en tanto es a la Administración a quien compete que se realicen los actos comprometidos en la fiducia mercantil.		
C-630/11	Ley 1425 de 2010 ‘por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo’	Incentivos económicos en las acciones populares	24-08-11	Omar Alberto Franco Becerra, Óscar Eduardo Borja Santofimio y Nora Sofía Daza de Amador	MARÍA VICTORIA CALLE CORREA	<ul style="list-style-type: none">• Se ha desvirtuado la bondad de los incentivos establecidos por el Estado como un reconocimiento a los accionantes populares que logren un fallo favorable pues su mala utilización lo ha convertido en herramienta de desmedidos intereses económicos particulares que nada tienen que ver con los nobles propósitos que inspiran las acciones populares.• Al derogar las normas que establecían un incentivo económico el congreso no viola el principio de no regresividad ni el de progresividad, teniendo en cuenta que no se trata de una	<ul style="list-style-type: none">- Fideicomiso- Patrimonio autónomo- Demanda en reconvencción- Escritura publica- Compraventa- Autonomía de la voluntad	Declarar EXEQUIBLE la Ley 1425 de 2010 ‘por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo’, por las razones analizadas.

						<p>medida que obstaculiza la protección de la cual gozaba el derecho político en cuestión</p> <ul style="list-style-type: none">• La supresión del incentivo a favor del actor popular no vulnera el principio de igualdad y equidad de las cargas públicas, ni establece una restricción injustificada al acceso a la administración de justicia. No se puede pensar que las personas e individuos de comunidades afectadas dejen de emplear este derecho político, que sigue siendo una herramienta poderosa para que las personas, incluso los más débiles, puedan enfrentar a los poderes públicos• El incentivo económico derivado de acciones populares en que el Estado es demandante o que es objeto de renuncia por el actor popular particular, es fuente de ingresos del Fondo para la Defensa de los Intereses Colectivos (FDIC). En tal sentido, la eliminación de esos recursos disminuye las ayudas para la asunción de los costos en los procesos. No obstante, se trata de un impacto sobre una medida complementaria de promoción y defensa de tales derechos y no de una medida de carácter estructural que defina de forma principal el alcance o la protección de derecho social alguno.	
--	--	--	--	--	--	--	--

C-077/12	Artículos 11,12,13,14,20,22,23, 24,49,175 y 274 de la ley 1450de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014	Patrimonios autónomos y esquemas fiduciarios para el giro de recursos del Sistema General de Participaciones	15-02-12	Andrés de Zubiria Samper	MAURICIO GONZALES CUERVO	<ul style="list-style-type: none">• El accionante considera que el Artículo 12 de la Ley 1450 de 2011 vulnera el principio de la Autonomía de las Entidades Territoriales, pues consagra la injerencia del Gobierno Nacional en los recursos para el agua potable y saneamiento básico, al obligar a los entes territoriales a recibir los recursos del Sistema General de Participaciones a través de patrimonios autónomos diferentes a los esquemas fiduciarios departamentales y bajo el cumplimiento de unos requisitos y condiciones establecidas por la Nación.• considera que lo anterior implica que para acceder a los recursos para agua potable y saneamiento básico de SGP es “necesario que se giren a patrimonios autónomos diferentes a los esquemas fiduciarios de los Planes Departamentales de Agua”.• la norma en estudio es clara al establecer textualmente que: “en adición a lo previsto por la Ley 1176 de 2007 para la autorización del giro directo de recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones a patrimonios autónomos diferentes a los esquemas fiduciarios constituidos en el marco de los Planes Departamentales (...) deberá acreditar (...) el	<ul style="list-style-type: none">- Autonomía de entes territoriales- Sistema General de Participaciones- Esquemas fiduciarios departamentales	Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 13, 14, 20, 22, 23, 24, 49 y 175 de la Ley 1450 de 2011, por los cargos analizados en esta sentencia. Segundo. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 11, 12 y 274 de la Ley 1450 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda y del artículo 14,por la misma ineptitud en relación con el cargo de reserva de ley orgánica
----------	--	--	----------	--------------------------	--------------------------	---	--	--

						<p>cumplimiento de los siguientes requisitos (...)".</p> <ul style="list-style-type: none">• Se hace evidente que el propio Artículo reconoce la existencia de otros mecanismos para el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones, diferentes a aquel que se encuentra creando. la norma en cuestión es explícita en establecer que el mecanismo que se encuentra creado, adiciona los previstos por la Ley 1176 de 2011 , lo que difícilmente deja concluir que ésta se encuentra haciendo obligatorio el giro de dicho recursos únicamente bajo la vía que se encuentra regulando. Así mismo, la norma establece y reconoce claramente la existencia de los esquemas fiduciarios constituidos a través de los diferentes Planes Departamentales de Agua.• Así a diferencia de lo considerado por el accionante, el Artículo 12 de Ley 1450 de 2011 no limita el giro de los recursos a través de patrimonios autónomos diferentes a los del Plan Departamental, sino por el contrario, crea una opción adicional para que los entes territoriales decidan el mecanismo de transferencia que más consideren conveniente a sus intereses y necesidades.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none">• la interpretación que se realiza en la demanda se aleja significativamente de la que lógica y jurídicamente se puede hacer de la norma en cuestión. Las razones que exponen una violación de la Constitución Política de 1991, son una deducción que no corresponde a la proposición jurídica de la norma.• considerando que se está en presencia de una ineptitud sustantiva del cargo, la Sala se declarara inhibida para pronunciarse sobre la materia.		
C-368/12	Artículo 2 de la Ley 1371 de 2009 por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones	Fiducia mercantil para el pago de pasivo pensional de universidades publicas	16-05-12	Sandra Paola Charris Ibarra	LUIS ERNESTO VERGARA SILVA	<ul style="list-style-type: none">• La función esencial del Fondo es arbitrar ciertos recursos obtenidos del presupuesto nacional, dirigidos a financiar un objeto particular, como es el pasivo pensional de las universidades estatales. Para ello, este se subroga en las obligaciones de las diferentes cajas y fondos de previsión existentes con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.• Existe un mandato constitucional específico, relativo a que la definición de la institucionalidad que conforma el sistema de seguridad social es un asunto que corresponde al legislador. Esta facultad, a su vez, solo está sometida a límites de proporcionalidad y razonabilidad. Es la legislación la que define,	- Sistema de seguridad social - Potestad legislativa - Pasivo pensional de universidades publicas - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	Declarar EXEQUIBLE la expresión “fiduciaria”, contenida en el artículo 2º de la Ley 1371 de 2009 “por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones”.

						<p>incluso, las competencias y potestades de los diferentes actores del sistema. Así como para definir qué agentes privados y estatales están habilitados para suministrar las prestaciones propias de la seguridad social. Por lo tanto, no puede sostenerse que agentes de ese sistema, individualmente considerados, tengan un derecho subjetivo de participación, ya que, contrario a como sucede con otros mercados, la institucionalidad de la seguridad social y la definición de sus participantes es un asunto que por mandato constitucional se asigna completamente al legislador</p> <ul style="list-style-type: none">• En términos del fallo “la libertad de empresa no es un derecho absoluto y por tanto puede estar sujeto a las limitaciones y distinciones entre personas que determine el legislador, las cuales deben atender fines constitucionales, obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación , obedecer al principio de solidaridad, no ser de tal magnitud que hagan nugatorio el derecho, y ser razonables y proporcionadas• Si el propósito de la ley acusada es fijar reglas para la concurrencia de recursos del presupuesto nacional en el	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>pago del pasivo pensional de las universidades públicas, resulta acertado que el contrato comercial escogido sea la fiducia mercantil, pues ella es la institución jurídica que permite que se conforme un patrimonio autónomo, afectado exclusivamente para dicho pago de las obligaciones prestacionales que estaban a cargo de las cajas y fondos de previsión de las mencionadas universidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• En criterio de la Sala, la preferencia del legislador por el contrato de fiducia mercantil para la administración de los recursos del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales, tiene pleno sustento en la necesidad de otorgar un tratamiento adecuado a esos recursos públicos• El aspecto central del contrato de fiducia es la precisa determinación acerca del uso que debe darse a los recursos otorgados. Así, de acuerdo con la misma normativa (i) los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida y (ii) dentro de los deberes del fiduciario está invertir los bienes provenientes del negocio	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca</p> <ul style="list-style-type: none">• El aparte normativo acusado busca cumplir con el propósito distinguible de configurar patrimonios autónomos destinados al pago de las pensiones que estaban a cargo de los fondos y cajas de previsión de las universidades públicas, financiados principalmente con recursos del presupuesto nacional. Finalidad que a juicio de la Corte no está constitucionalmente prohibida, cumpliéndose de esta forma con el primer paso del juicio leve de proporcionalidad. Ahora bien, la medida legislativa es adecuada puesto que la fiducia mercantil, que por mandato legal es un contrato cuya celebración corresponde a los establecimientos de crédito y entidades fiduciarias, es un negocio jurídico precisamente dirigido a la administración de recursos destinados a un fin específico.		
C-1021/12	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 1450 de 2011	EXENCION DE GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA OPERACIONES	28-11-2012	Carlos Alberto Jiménez Cabarcas	Jorge Iván Palacio Palacio	<ul style="list-style-type: none">• Se precisa que el fundamento para la imposición de gravámenes se justifica en dos principios. En primer lugar el principio democrático, según el cual no puede haber	<ul style="list-style-type: none">- Tributación- Exenciones Tributarias- Derecho a la igualdad- Principio de igualdad- Principio de Equidad Tributaria	Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “REALIZADAS POR ENTIDADES VIGILADAS POR

		DE FACTORING REALIZADAS POR ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTEND ENCIA DE SOCIEDADES				<p>tributo sin representación. Y en segundo lugar el principio de legalidad, según el cual no puede haber impuesto sin ley. Por ello es necesario garantizar la intervención popular, evitando así los abusos del poder y fortaleciendo la seguridad jurídica.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se puede exonerar del pago de tributos ya sea parcial o total por razones de política fiscal, social o ambiental con la finalidad de generar estímulo fiscal.• El principio de equidad es un límite a la libertad de configuración del Legislador en materia tributaria. De esto se deriva que debe tener el Legislador una razón justificada y razonable para hacer un trato análogo cuando existan condiciones fácticas similares o uno distinto ante situaciones sustancialmente distintas.• “De acuerdo con la jurisprudencia para evaluar la constitucionalidad de medidas legislativas en materias económicas, tributarias o de política internacional, en principio deberá adelantarse un test leve de igualdad^[21]. No obstante, existe la posibilidad de que una ley	<p>- Juicio de Igualdad</p> <p>- Test de proporcionalidad</p> <p>- Juicio de constitucionalidad</p> <p>- Gravamen a los movimientos financieros</p> <p>- Contrato de Factoring</p>	LA SUPERINTENDEN CIA DE SOCIEDADES” y “vigiladas por la Superintendencia de Sociedades” del artículo 38 de la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010- 2014”.
--	--	---	--	--	--	---	--	--

						<p>de esta naturaleza discrimine por motivos de raza u opinión política, o en general involucre algún criterio problemático o sospechoso de discriminación, lo cual implicará adelantar un control más cuidadoso.”</p> <ul style="list-style-type: none">• La jurisprudencia advierte que cuando exista un indicio de inequidad o arbitrariedad será necesario hacer un test más exigente como lo sería el test intermedio de igualdad.• “El GMF corresponde a un impuesto del orden nacional, de naturaleza indirecta, cuyo hecho generador lo constituye la realización de transacciones mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas dentro del sistema financiero. Es un impuesto a cargo de los usuarios y entidades del sistema; la base gravable estará integrada por el valor total de la transacción mediante la cual se dispone de los recursos y la tarifa actual es equivalente al cuatro por mil (4 x 1000).”• El contrato de factoring es un contrato atípico en Colombia que la Superintendencia	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Financiera se ha encargado de definir como; El negocio jurídico que se instrumenta a través de la compraventa de cartera entre una persona natural o jurídica (en adelante cliente) y una empresa de factoring (en adelante factor), la cual se compromete a suministrarle liquidez a la primera, vía financiación. Dicho contrato comporta la prestación de un conjunto de servicios por parte del factor, tales como la administración y el posterior cobro de los títulos a él transferidos una vez cumplido el plazo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para el análisis constitucional la Corte hizo un estudio de los antecedentes de la norma demandada, estudio que no logro encontrar una justificación para el trato diferencial en ella prevista. La corte manifestó que por el contrario, según el análisis de antecedentes de la norma lo que se observo fue una intención de ampliar la exención tributaria a las operaciones de factoring como instrumento ágil para lograr la obtención de recursos de capital para la micro, mediana y pequeña empresa.	
--	--	--	--	--	--	---	--

C-015/13	Demanda de inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012	Marco general para la libranza o descuento directo	23-01-2013	Nilson Giovanny Moreno López	Mauricio González Cuervo	<ul style="list-style-type: none">La demanda en esta oportunidad se dirige contra el artículo 15 de la Ley 1527 de 2012 “por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo” por la presunta vulneración de la regla de unidad de materia consagrada en el artículo 158 C.P., al regular materias ajenas al contenido temático de la ley, como lo son la derogatoria expresa de: i) el artículo 8º, numeral 2º, del Decreto Ley 1172 de 1980, que dispone unas prohibiciones a las sociedades comisionistas de bolsa y a sus administradores; (ii) el parágrafo 4º del artículo 127.1 del estatuto tributario que prescribe el tratamiento contable y tributario al que deben someterse los contratos de leasing con opción de compra y (iii) el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de 1995 que establece que los contratos de arrendamiento financiero o leasing en proyectos de infraestructura no podrán celebrarse sino hasta el 1º de enero de 2012 y a partir de esa fecha se regirán	<ul style="list-style-type: none">Sociedades comisionistas de bolsaRégimen tributarioRégimen contableContratos de leasingUnidad de materiaContratos de arrendamiento financiero	RESUELVE: Declarar INEXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012 que reza “el artículo 8º numeral 2º del Decreto-Ley 1172 de 1980, el parágrafo 4º del artículo 127-1 del estatuto tributario, el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de 1995”, por vulneración de la regla de unidad de materia.
----------	--	--	------------	------------------------------	--------------------------	---	--	---

						<p>por los términos y condiciones previstos en el artículo 127-1 de dicho estatuto.</p> <ul style="list-style-type: none">• No satisface el principio de la unidad de materia, una disposición que contenida en una ley regulatoria del régimen o marco general de la libranza o descuento, como su materia dominante, incorpore disposiciones relativas a (i) regulaciones de las sociedades comisionistas de bolsa, (ii) el régimen tributario y contable de los contratos de leasing con opción de compra y para proyectos de infraestructura, por carencia de conexidad con el núcleo temático de dicha ley.		
C-751/13	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1527 de 2012 “Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones	Crédito de libranza, Contrato de fiducia mercantil/ Control de constitucionalidad-	30/10/2013	Alfredo Beltrán Sierra, Clemencia Dupont Cruz y Clara Inés González Aranda	Luis Guillermo Guerrero Pérez	<ul style="list-style-type: none">• Por medio de la ley 1527 de 2012 se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones. En general esta modalidad crediticia consiste en que cualquier persona natural, asalariada o pensionada, pueda adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, respaldados con su salario, sus prestaciones sociales de	<ul style="list-style-type: none">- Patrimonio autónomo- Entidad operadora- Fiducia mercantil- Obligaciones entidad operadora- Sociedades- Procedimiento legislativo- Aprobación del proyecto de ley	1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-015 de 2013, mediante la cual se declaró inexecutable la expresión “el artículo 8º numeral 2º del Decreto-Ley 1172 de 1980, el parágrafo 4º del artículo 127-1 del estatuto tributario, el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de 1995”,

						<p>carácter económico o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien por virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se precisa además que la entidad operadora, Es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo, Infis, sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito		<p>contenida en el artículo 15 de la Ley 1527 de 2012.</p> <p>2. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por sustracción de materia, con respecto a la expresión “el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011” correspondiente al aparte restante del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, y en relación con el artículo 13 de la Ley 1527 de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.</p> <p>3. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el resto de la Ley 1527 de 2012.</p> <p>Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades operadoras estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.</p> <ul style="list-style-type: none">• A continuación se transcriben las obligaciones de la entidad operadora establecidas en dicha ley;• Sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten por mandato legal y reglamentario, la entidad operadora tiene el deber de dejar a disposición de los beneficiarios de sus productos, bienes y servicios a través de la modalidad de libranza, el extracto periódico de su crédito con una descripción detallada del mismo, indicando un número de teléfono y dirección electrónica en caso de dudas o reclamos, así mismo deberá reportar la suscripción de la libranza a los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial y de servicios, para lo cual deberá cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por estos en sus reglamentos y lo contemplado en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, adicionen	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>o reglamenten.</p> <ul style="list-style-type: none">• A continuación la Corte hace un examen de constitucionalidad de la Ley y un control del trámite en general;• En el presente caso, considera la Corte que las acusaciones efectuadas por los actores frente a la Ley 1527 de 2012 buscan proyectar, sobre toda ella, el efecto de inconstitucionalidad deprecado, siendo tan solo el objeto exclusivo de su cuestionamiento los artículos 1º y 3º de la aludida preceptiva. Aplicando, entonces, los criterios fijados por la jurisprudencia, se tiene que si bien en la demanda se identifican las normas constitucionales presuntamente vulneradas y la ley que es acusada de contrariarlas, no logra demostrarse específicamente las razones por las cuales tales disposiciones normativas se oponen a la Constitución Política ni la manera como ellas tendrían la virtualidad de irradiar las consecuencias de inconstitucionalidad que se les atribuye, a todo el conjunto de la ley.• Así las cosas, al no cumplirse con los requisitos mínimos de procedibilidad,	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>en cuanto la demanda no propone un verdadero cargo de contenido constitucional, por no acreditarse los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, no le queda a la Corte camino distinto que abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados contra la generalidad de la Ley 1527 de 2012.</p> <ul style="list-style-type: none">• En este sentido, en el asunto que se examina no se observa ninguna de las irregularidades aducidas por los demandantes, por cuanto que, como ya se señaló, antes de la correspondiente votación, las propuestas modificatorias fueron identificadas en el desarrollo del debate y conocidas por los participantes en él, otorgando la oportunidad de que se debatiera acerca de ellas y cerrándose la discusión para que decidiera sobre su aprobación.• Encuentra esta Corte, además, que en el caso concreto se acreditan todas y cada una de las condiciones materiales y procedimentales que la jurisprudencia ha esbozado como elementos integrantes del anuncio, toda vez que fue hecho por el presidente	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>de la comisión respectiva en sesión distinta y previa a aquella en que se realizó la votación del proyecto, siendo su fecha cierta y la votación realizada en la sesión específicamente anunciada, esto es, el 9 de noviembre de 2010, como consta en la citada Acta 1 de 2010, que da cuenta de la sesión conjunta de las comisiones terceras constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes y el Senado de la República.</p> <ul style="list-style-type: none">• A su vez la Corte encuentra nuevamente que en sede del debate legislativo se garantizó la oportunidad a cada uno de los representantes de intervenir en la discusión tanto sobre el articulado del proyecto como de las proposiciones modificatorias de su contenido. En efecto, en acatamiento a las normas que regulan el proceso legislativo, las directivas de la plenaria mantuvieron abiertos los espacios de participación con las debidas garantías democráticas, otorgando a los representantes la participación libre en la deliberación del proyecto, en esa oportunidad, sometido a su conocimiento.	
--	--	--	--	--	--	---	--

T-186/15	Los actores interpusieron acción de tutela contra la Sala Primera Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y contra el Tribunal de Arbitramento integrado para resolver las controversias surgidas con la señora María Cristina Pretelt y la sociedad MCP Asesores de Seguros Ltda. Al considerar trasgredido su debido proceso con el laudo arbitral que resolvió tal controversia y por la sentencia que declaró infundado el recurso de anulación contra de dicho laudo.	Arbitramento	17/04/2015	Liberty Seguros SA y Liberty Seguros de Vida SA. Mediante apoderado judicial, el abogado José Fernando Torres Fernández de Castro.	LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ	<p>-La corte afirma en la sentencia que el constituyente reconoció al arbitramento como “un medio alternativo de resolución de conflicto, a través del cual las partes de manera libre, se sustraen de la justicia estatal, a fin de que un tercero, revestido temporalmente de función jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para ellas “.</p> <p>-En la sentencia la corte hace especial énfasis en el principio <i>Kompetenz- kompetenz</i> el cual afirma que <i>el tribunal resuelve sobre su propia competencia mediante auto que sólo puede ser objeto de recurso de reposición</i>. Por tanto el tribunal de arbitramento es capaz de reconocer su propia competencia para conocer de un determinado asunto. Debe así, de forma autónoma reconocer el ámbito de su competencia.</p> <p>-Con base al principio kompetenz-kompetenz , la sala que estudia el recurso de anulación contra laudos no esta facultada para revisar la competencia de los árbitros.</p> <p>-Los árbitros son independientes de reconocer el alcance de su competencia, tomando en cuenta el pacto compromisorio establecido en un contrato o el compromiso expresado por las partes. Estarían excediéndose</p>	<p>-Pacto compromisorio</p> <p>-Cesión de contrato</p> <p>-Competencia arbitral</p> <p>-Recurso extraordinario de nulidad.</p> <p>-Arbitraje</p> <p>-Tribunal de Arbitramento</p> <p>-Laudos Arbitrales</p> <p>-Principio Kompetenz-Kompetenz</p>	<p>Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida, el 6 de agosto de 2014, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de junio de 2014, que denegó el amparo deprecado en la causa instaurada por Liberty Seguros SA y Liberty Seguros de Vida SA contra la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que dirimió la controversia suscitada entre estas aseguradoras y la señora María Cristina Pretelt y MCP Asesor de Seguros Ltda.</p>
----------	--	--------------	------------	--	-------------------------------	---	---	--

					<p>solo si conocieran de controversias que no son objeto de transacción y se atribuyeran competencia sobre las mismas.</p> <p>-El precedente constitucional es vinculante, no es posible desconocer jurisprudencia anterior al momento de definir un conflicto.</p> <p>-Los particulares pueden administrar justicia de manera temporal mediante figuras como el arbitramento siempre que las partes de un conflicto hayan expresado su voluntad de que así sea. La decisión emitida por el tribunal arbitral, es decir el laudo tiene fuerza vinculante y hace transito a cosa juzgada.</p> <p>-Los laudos arbitrales no son exactamente iguales a las sentencias judiciales pues no están sujetos a trámites de segunda instancia a través del recurso de apelación.</p> <p>-“El recurso de anulación no se constituye como una segunda instancia propiamente, simplemente revisa si el laudo esta enmarcado en alguna de las causales de nulidad para poder decretarla”. El juez de anulación no puede fungir como juez de segunda instancia.</p> <p>-Hay cesión de contrato aun cuando el contrato celebrado tenga estipulado lo contrario si así</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>lo asumen las partes libremente. Esto sustentado en el principio de libertad contractual mediante el cual las partes expresamente o incluso por su comportamiento reiterado pueden modificar regulaciones del contrato aun durante su ejecución</p> <p>-“Si bien la ley exige que la cesión de contratos escritos también se realice de esa manera, el ordenamiento jurídico no impone una ritualidad especial al escrito más que su existencia”.</p>		
C-089/16	<p>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 82 (parcial) de la Ley 1474 de 2011</p>	<p>Demanda de Inconstitucionalidad</p>	<p>24/02/2016</p>	<p>Henry Fabián Rodríguez Gómez</p>	<p>Gloria Stella Ortiz Delgado</p>	<p>- La corte reitera los requisitos exigidos por ley que deben cumplir los accionantes para presentar una demanda de inconstitucionalidad en su dependencia, en este sentido afirma: “el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe precisar: el <i>objeto</i> demandado, el <i>concepto de la violación</i> y la razón por la cual la Corte es <i>competente</i> para conocer del asunto. La concurrencia de los tres requerimientos mencionados hace posible un pronunciamiento de fondo”.</p> <p>-Los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de la norma acusada deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes.</p>	<p>Requisitos demanda de inconstitucionalidad.</p> <p>-Argumentos de inconstitucionalidad.</p> <p>-Inhibición corte constitucional</p> <p>-Demanda de normas</p> <p>-Cargos contra una norma</p>	<p>RESUELVE</p> <p>Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las expresiones <u>“respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades”</u> y <u>“respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones”</u> contenidas en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda ”.</p>

					<p>-Claros en el sentido de que debe haber un hilo conductor que permita comprender a cabalidad la argumentación de la demanda porque existe una coherencia entre el contenido de la demanda y las justificaciones que lo sustentan. Ciertos porque deben ser reales y recaer sobre una proposición jurídica existente y verdadera. Específicos porque el ciudadano debe formular al menos un cargo completo e indicar porque se vulnera la constitución en la norma demandada. Pertinentes porque según la corte”el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta con la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica” ; y suficientes porque ” el demandante debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y éstos deben generar alguna duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.</p> <p>-Cuando esta involucrado un cargo de igualdad en la demanda es necesario que el demandante especifique las razones por las que considera que la norma advierte una desigualdad indicando los términos de comparación, es decir, las personas, elementos y hechos o situaciones que son comparables.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						-Los cargos de una demanda de inconstitucionalidad no deben ser hipotéticos, abstractos ni sustentados en una valoración subjetiva.		
C-106/16	Revisión constitucional de la Ley 1749 de 2015, “ <i>Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico’</i> , suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”. Este fondo buscaba integrar las economías de los cinco estados: México, Chile, Perú, Estados Unidos y Colombia, se buscaba establecer un fondo de cooperación para desarrollar proyectos en materia medioambiental, de innovación y desarrollo.	Control de constitucionalidad de tratados internacionales	02/03/2016	No hay actores, es un procedimiento de control de constitucionalidad iniciado por la corte	Gabriel Eduardo Mendoza Martelo	<p>La Corte Constitucional tiene competencia para decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.</p> <p>-Este control de constitucionalidad que ejerce la corte se caracteriza porque es:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Previo al reconocimiento del tratado y posterior a la aprobación de la ley por el congreso y a la sanción presidencial.2- Automático, debido a que el Gobierno Nacional debe remitir la ley a la corte constitucional dentro de los 6 días posteriores a la sanción.3- “Integral, porque el examen de constitucionalidad comprende los aspectos formales y materiales del tratado internacional y de su ley aprobatoria. Se revisa el proceso de negociación y celebración del instrumento en el plano internacional y el trámite legislativo cumplido en el congreso”.	<p>-Tratados internacionales.</p> <p>-Vicios insubsanables</p> <p>-Control de constitucionalidad.</p> <p>-Tramite para aprobación de tratados internacionales</p> <p>-Vicios de tramite</p> <p>-Fondo de cooperación alianza del pacifico</p> <p>-Ley 1749 de 2015</p> <p>-Proyectos de ley de relaciones internacionales</p>	Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1749 de 2015, “ <i>Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico’</i> , suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.

						<p>-“Los proyectos de ley de relaciones internacionales deben iniciar su trámite en el Senado de la República y el resto del procedimiento debe adelantarse de conformidad con lo previsto para el trámite de leyes ordinarias”.</p> <p>-La corte reitera que la constitución exige que “los proyectos de ley requieren publicación oficial por el Congreso antes de dar curso en la comisión respectiva, también la aprobación en el primer debate desarrollado en la comisión y la aprobación por cada una de las Cámaras en segundo debate, previa verificación del quórum y con las mayorías exigidas”.</p> <p>-“En los cuerpos colegiados de elección directa el voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley, de donde se desprende que en el trámite legislativo la votación nominal y pública es la regla general“. Este requisito se incumplió en el trámite surtido para la ley 1749 de 2015 pues la ley fue aprobada en voto secreto y a falta de votaciones nominales no hay manera de inferir si en el momento en que fue votado y aprobado mediante votación ordinaria el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo de Cooperación de la Alianza del</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Pacífico estaban presentes los congresistas en el número necesario para constituir el quorum decisorio e integrar la mayoría exigida y esto le ocasiona al trámite un vicio de inconstitucionalidad insubsanable.</p> <p>-La corte así mismo precisa lo establecido en la constitución, afirmando que “Si los proyectos de ley no completan su trámite en una legislatura, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren y siempre que hubieren recibido primer debate en alguna de las dos cámaras ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.</p>		
C-159/16	<p>Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 419-parcial del Código General del Proceso, que dispone lo siguiente: “<u>Artículo 419. Procedencia. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo</u>”.</p>	Proceso monitorio frente a acreedores de obligaciones dinerarias	06/04/2016	Sebastián Gómez Alarcón, José Joaquín Rodríguez Arévalo y Kelly Johana Merchán Bejarano	Luis Ernesto Vargas Silva	<p>Para los demandantes el hecho de que el proceso monitorio solo se pueda llevar acabo en obligaciones dinerarias viola los Derechos Fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva pues los acreedores de obligaciones no dinerarias no podrían adelantar un proceso de este tipo.</p> <p>La corte declara la exequibilidad del artículo argumentando que:</p> <p>-Para que la afirmación de los demandantes sea verdadera se debería probar que “(i) los acreedores de las obligaciones no dinerarias efectivamente no cuentan con opciones procesales para hacer efectiva sus</p>	<p>-Obligaciones Dinerarias</p> <p>-Proceso Monitorio</p> <p>-Obligaciones no dinerarias</p> <p>-Tutela judicial efectiva</p> <p>-Igualdad en acceso a la administración de justicia</p> <p>-Proceso para obligaciones sin titulo ejecutivo</p>	<p>Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “<i>Quien pretenda el pago de una obligación en dinero</i>”, contenida en el artículo 419 del Código General del Proceso.</p>

	Se demanda la inconstitucionalidad de la expresión subrayada.					<p>obligaciones; o (ii) de existir estos mecanismos, los mismos se muestran objetivamente inidóneos para lograr dicha exigibilidad judicial”.</p> <p>-En cuanto al primer supuesto, la corte observa que efectivamente hay diferentes mecanismos judiciales para la ejecución de obligaciones no dinerarias. Pues el código general del proceso provee, que este tipo de obligaciones pueden ser exigibles por los siguientes procesos:</p> <p><i>“I) el proceso ejecutivo por obligación de dar o hacer ; (ii) el proceso ejecutivo por obligación de no hacer y por obligación condicional ; (iii) el proceso verbal de resolución de compraventa ; (iv) el proceso verbal de entrega de la cosa por el tradente al adquirente; (iv) los procesos verbales de rendición provocada o espontánea de cuentas; (v) el proceso verbal de restitución de inmueble arrendado, así como otros procesos de restitución de la tenencia, (vi) el proceso verbal sumario de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores, (vii) los procesos verbales sumarios relacionados con las controversias comerciales sobre la cosa vendida, el precio, las acciones por evicción, el inventario de bienes recibidos en fiducia mercantil, y la peritación por expertos; (viii) el proceso verbal sumario de lanzamiento por ocupación de hecho de</i></p>	
--	---	--	--	--	--	---	--

						<p><i>predios rurales; (ix) el proceso declarativo especial de expropiación; (x) el proceso declarativo especial de deslinde y amojonamiento; y (xi) el proceso divisorio”.</i></p> <p>-Respecto del segundo supuesto, la corte concluye que no hay evidencia alguna que indique que los procesos anteriores no son idóneos para hacer exigible judicialmente una obligación no dineraria.</p> <p>-“El proceso monitorio es una herramienta procesal dirigida a facilitar la exigibilidad judicial de obligaciones dinerarias de cuantías menores y medianas que no constan en título ejecutivo, generalmente producidas dentro de mercados económicos parcialmente formalizados”. Es un proceso ágil y eficaz, fruto de la libertad de configuración del legislador.</p> <p>-Haciendo un juicio de proporcionalidad, no se entienden vulnerados los derechos de los acreedores de obligaciones diferentes a las dinerarias, pues para estos se han dispuesto diversos procesos que se pueden llevara a cabo con el fin de acceder a la administración de justicia para hacer exigible su obligación.</p>		
C-208/16	Ley 1762 de 2015, ‘por medio de la cual se adoptan	Instrumentos para prevenir, controlar y	27/04/2016	Henry Villarraga Oliveros	María Victoria Calle Correa	-“Para demostrar que el Congreso violó la reserva de ley estatutaria o de ley orgánica al expedir una	-Reserva de ley estatutaria	Se declara exequible la ley 1762 de 2015

	instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.	sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.				<p>determinada ley de la República, no es relevante demostrar que el Congreso cambió el contenido de una ley que bautizó y denominó ‘ley orgánica’ o ‘estatuto’. Lo adecuado es mostrar que, materialmente, las normas acusadas con base en esta norma son de aquellas que son consideradas estatutarias u orgánicas por la Constitución y están sometidas a reglas de procedimiento diferente”.</p> <p>-La violación del principio de unidad de materia sólo puede predicarse de <i>“aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad (i) causal,(ii) teleológica, (iii) temática; (iv) sistémica o (v) por consecuencia con la materia dominante de la misma”</i>; sólo en tal caso <i>“deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexecutable si integran el cuerpo de la ley”</i>. La jurisprudencia constitucional ha señalado que <i>“...la intensidad con la cual se analiza si se viola o no el principio de unidad de materia, es de nivel bajo en la medida en que, si es posible encontrar alguna relación entre el tema tratado en un artículo y la materia de la ley, entonces la disposición acusada es, por ese concepto, executable. Tal relación no tiene que ser directa, ni estrecha...”</i></p>	<ul style="list-style-type: none">-Lavado de activos-Trámite para integrar instrumentos-Requisitos para demandar-Unidad de materia-Evasión fiscal-Contrabando-Defraudación fiscal	
--	---	---	--	--	--	---	---	--

					<p>-La ley 1762 de 2015 “moderniza y adecua la normativa necesaria para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el favorecimiento de esas conductas; para fortalecer la capacidad institucional del Estado; para establecer mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas por las autoridades competentes; y para garantizar la adopción de medidas patrimoniales que disuadan y castiguen el desarrollo de esas conductas”.</p> <p>-La corte considera que con base a la jurisprudencia reiterativa sobre el principio de unidad, este debe ser entendido no como una camisa de fuerza al Congreso, foro de deliberación legislativa, en democracia, pues según precisa la corte “Al accionante no le basta con mostrar que no hay una relación directa o estrecha, tiene que probar que las normas acusadas de violar tal principio carecen de toda conexión con el tema central de la ley”.</p> <p>-No existe obligación alguna de que los documentos del procedimiento legislativo sean publicitados a la vez a conjuntamente. Lo importante es que se publiquen y en tiempo.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>-Los eventos en que se estudie la constitucionalidad de leyes cuyo contenido dé la sensación de pertenecer a dos o más comisiones constitucionales permanentes de acuerdo con la distribución material de la Ley 3ª de 1992, se debe ejercer un control de constitucionalidad flexible.</p> <p>-“El Congreso de la República no viola las reglas de competencia de las comisiones constitucionales legislativas, al tramitar un proyecto de ley que tiene un objeto complejo que aborda diversas áreas del derecho por medio de las comisiones legislativas que se ocupan especialmente de esos asuntos o de los temas más afines y prevalentes del Proyecto de ley de que se trate”.</p> <p>-Para la corte la ley tiene una finalidad primordial que es la de proteger los derechos de quienes son víctimas de las organizaciones de crimen organizado. Las víctimas de estos grupos suelen verse afectadas en muchos de sus derechos fundamentales.</p>		
SU-587/16	Como consecuencia de los hechos descritos, el señor González Pérez invocó la protección de su derecho fundamental de	Fiducia pública	27/10/16	José Ferney González Pérez	Luis Guillermo Guerrero Pérez	<p>El Fondo de Solidaridad Pensional fue creado por el artículo 25 de la Ley 100 de 1993, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Según se</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado - Fondo de solidaridad pensional - Derecho de petición 	Primero.- LEVANTAR los términos suspendidos en el presente proceso.

	<p>petición, el cual consideró vulnerado ante la falta de respuesta en tiempo al requerimiento realizado el pasado 10 de agosto de 2015. Con tal propósito, le pide al juez de tutela que ordene a COLPENSIONES dar una respuesta oportuna y de fondo a dicha solicitud.</p>				<p>dispone en la norma en cita, los recursos que lo conforman serán administrados “<i>en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario</i>”</p> <p>cuando el legislador dispuso en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, que el Fondo de Solidaridad Pensional tiene la obligación de cubrir la <i>pensión especial de invalidez</i>, en los términos en que se dispone en dicha norma, le agregó a esa institución una nueva función que, por sus características y como ha sido advertido por las autoridades vinculadas al presente proceso, no puede ser subsidiada con los recursos que actualmente se encuentran en las subcuentas de <i>solidaridad y subsistencia</i>, por tratarse de rentas con contenido parafiscal, vinculadas con la realización de los principios de universalidad e integralidad del Sistema General de Seguridad Social.</p> <p>No obstante, y como previamente se advirtió, ello no supone que dicha prestación se convierta en una mera declaración simbólica del Estado carente de eficacia jurídica, en la medida en que de por medio se encuentra la realización de derechos fundamentales como la vida digna y el mínimo vital de las víctimas</p>	<p>- Parafiscalidad de los recursos del sistema de seguridad social integral</p>	<p>Segundo.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el día 24 de diciembre de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, en lo referente al amparo del derecho fundamental de petición del señor José Ferney González Pérez. Asimismo, ADICIONAR el amparo de sus derechos al mínimo vital y a la vida digna.</p> <p>Tercero.- ORDENAR al Ministerio del Trabajo, como entidad a la cual se encuentra adscrita el Fondo de Solidaridad Pensional, que en el término no mayor a un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a constituir una nueva fiducia, o la modalidad operativa</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>del conflicto armado, respecto de las cuales el Estado asume una obligación de garantía. Por ello, en este caso, es preciso darle un efecto útil al artículo 25 de la Ley 100 de 1993, al cual se refiere el citado artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Al respecto, la disposición en mención señala que el Fondo es una cuenta especial, adscrita al Ministerio del Trabajo, “<i>cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías del sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley</i>”.</p> <p>Una interpretación razonable de dicho precepto legal, a partir de la asignación de una nueva función por parte del legislador, que no guarda correspondencia con los recursos que se manejan en las subcuentas de <i>solidaridad</i> y <i>subsistencia</i>, es que el Congreso de la República, al disponer que el Fondo de Solidaridad Pensional tiene la obligación de cubrir la <i>pensión especial de invalidez</i>, impuso la obligación, en los términos del artículo 25 de la Ley 100 de 1993, de crear una nueva fiducia, por fuera de la actualmente existente y que maneja recursos parafiscales, con</p>		<p>alternativa que se estime adecuada, la cual, mientras no se defina una fuente distinta, deberá conformarse con recursos del Presupuesto General de la Nación, cuya identificación y desembolso se hará por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las normas presupuestales aplicables, con el fin de asegurar la existencia de un capital que permita cubrir el pago de las <i>pensiones especiales de invalidez</i> a favor de las víctimas que sean reconocidas por COLPENSIONES y que, por ende, excluya el uso de los recursos parafiscales de las subcuentas de <i>solidaridad</i> y <i>subsistencia</i> de dicho Fondo.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>el propósito de que a través de ella se haga efectiva la nueva prestación. No se trata de una carga irrazonable ni desproporcionada, porque así como no se deben confundir los recursos de las subcuentas, nada impide que se adopten medidas que eviten el uso inadecuado de las rentas parafiscales.</p> <p>En todo caso, a juicio de la Corte, la dificultad se encuentra en establecer la fuente de los recursos con que debe capitalizarse la fiducia o, eventualmente, la otra modalidad operativa que se asuma para cubrir las obligaciones que emanan de la <i>pensión especial de invalidez</i>. Al respecto, lo que está claro es que la misma no puede tener recursos que hagan parte del Sistema Integral de Seguridad Social, por lo que ante la falta de señalamiento expreso por parte del legislador, debe entenderse que su origen se encuentra en los recursos del Presupuesto General de la Nación, cuyo giro debe asegurarse por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los principios de oportunidad, celeridad y eficacia</p>		<p>Esta fiducia se deberá constituir de manera independiente y distinta de aquella que tiene a su cargo la administración de las rentas que integran las subcuentas de la referencia y deberá proceder a reembolsar a COLPENSIONES, en un período prudencial, no mayor a seis meses, la totalidad de las sumas dinero que la citada administradora de pensiones haya destinado para garantizar el pago periódico de las <i>pensiones especiales de invalidez</i> que sean reconocidas.</p> <p>El Ministerio del Trabajo, a través de la fiducia que se constituya, deberá informar permanentemente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la asignación presupuestal</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>requerida, para que el Fondo de Solidaridad Pensional pueda cumplir con su obligación de <i>financiación</i>, en los términos dispuestos en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y con dichos valores pueda realizar la obligación de reembolso frente a COLPENSIONES.</p> <p>Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en un término no mayor a doce meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, y de manera paralela a lo dispuesto en el numeral anterior, proceda a realizar los trámites necesarios para identificar y desembolsar los recursos correspondientes del Presupuesto General de la Nación que permitan financiar, en adelante, la</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p><i>pensión especial de invalidez a favor de las víctimas de la violencia.</i> Esta tarea deberá ser desarrollada de forma coordinada con el Ministerio del Trabajo, para que tales recursos sean asignados a la nueva fiducia cuya creación se ordena, con miras a garantizar la efectividad de la prestación reclamada.</p> <p>Quinto.- ORDENAR a COLPENSIONES, a través de su representante legal o de quien haga sus veces, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a levantar la decisión de dejar en suspenso el reconocimiento y pago de la <i>pensión especial de invalidez</i> a favor del señor José Ferney González Pérez, en los términos</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>descritos por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. En relación con los pagos periódicos que se efectúen, la citada administradora de pensiones tiene derecho a repetir contra el Fondo de Solidaridad Pensional, a través de la fiducia que se constituya para el manejo de las sumas que se destinen desde el Presupuesto General de la Nación, y que tengan como fin cubrir el capital que demande esta prestación. El deber de reembolso se hará efectivo en el término máximo dispuesto en el numeral 3 de la parte resolutive de esta sentencia.</p> <p>Sexto.- ORDENAR al Ministerio del Trabajo que supervise el cumplimiento de las obligaciones de reconocimiento, pago y financiación</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>que realicen las autoridades competentes en relación con la garantía de la <i>pensión especial de invalidez</i> a favor de las víctimas del conflicto armado interno, con miras a procurar la satisfacción de las necesidades básicas de dicho grupo de especial protección constitucional.</p> <p>Séptimo.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que, en ejercicio de su función como Coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, incluya la prestación consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 dentro de la oferta institucional del Estado para las</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>víctimas del conflicto armado, específicamente en la información que se brinda por los Centros Regionales de Atención y Reparación.</p> <p>Octavo.- ACLARAR que las decisiones que aquí se adoptan no excluye la potestad que se otorga en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, para que el Gobierno Nacional designe una entidad de naturaleza oficial distinta para reconocer la <i>pensión especial de invalidez</i>, para disponer de las fuentes de financiación destinadas a su cobertura o para asignar a una nueva autoridad la labor de pago periódico, siempre que dicha designación garantice criterios de oportunidad, celeridad y eficacia que demandan la</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>cancelación completa e integral de este beneficio legal.</p> <p>Noveno.- Esta sentencia tiene efectos <i>inter comunis</i>, por lo que las órdenes aquí adoptadas se extenderán a todas las personas víctimas del conflicto armado a quienes se les hubiere dejado en suspenso o negado su derecho a la <i>pensión especial de invalidez</i> consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, , invocando razones de sostenibilidad o de protección a los recursos parafiscales de la seguridad social, siempre que COLPENSIONES haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiarios de dicha prestación.</p> <p>Décimo.- Por Secretaría General de la Corte</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Constitucional, LÍBRESE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
C-438/17	Decreto ley 691 de 2017	Contrato de fiducia	13/07/17	Revisión oficiosa de constitucion alidad por parte de la Corte al decreto ley 691	Gloria Stella Ortiz Delgado	<ul style="list-style-type: none">• “Los <i>fondos-cuenta</i>, al tenor del mencionado artículo 30 del EOP, son los ingresos pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el Legislador, es decir, son un sistema de manejo de recursos sin personería jurídica y son fondos especiales”. <p>Ahora bien, aunque los <i>fondos-cuenta</i> se encuentran vinculados a una autoridad de la administración pública, pueden organizarse como patrimonios autónomos y su estructura hace parte del amplio margen de configuración del Legislador. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que los patrimonios autónomos tienen “(...) <i>vida propia, así sea de manera transitoria como suele ser, están destinados a pasar en definitiva a alguna persona natural o jurídica, o a cumplir una finalidad, aplicación o afectación específica; y si bien no se les ha conferido personalidad jurídica, lo cierto es que su presencia ha dado lugar a gran cantidad de</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Fondos cuenta- Recursos parafiscales- Fondo Colombia en paz- Normas proferidas con ocasión de facultades extraordinarias al ejecutivo	Primero.- Declarar EXEQUIBLE el Decreto Ley 691 de 2017 “ <i>Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)” y se reglamenta su funcionamiento</i> ”.

					<p><i>operaciones y relaciones de derecho en el tráfico comercial de inocultable utilidad socio-económica, las cuales tanto pueden transcurrir pacíficamente como ser objeto de controversias o litigio”.</i></p> <p>En línea con lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que los“(…) <i>patrimonios especiales, afectados o separados se caracterizan porque necesitan una norma jurídica que los cree en la medida que representan una excepción al principio general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores; son independientes del patrimonio general y, como última característica, sólo responden por las obligaciones contraídas con ocasión de la finalidad perseguida”.</i></p> <p>Así, es pertinente aclarar las condiciones del contrato de fiducia mercantil mediante el cual se llevan a cabo el objeto de los patrimonios autónomos. De acuerdo con el artículo 1226 del Código de Comercio, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. De acuerdo con la misma disposición, solo los establecimientos de crédito y las entidades fiduciarias, vigiladas por la Superintendencia Financiera, podrán tener la calidad de fiduciarios.</p> <p>El aspecto central del contrato de fiducia es la precisa determinación acerca del uso que debe darse a los recursos otorgados. Así, de acuerdo con la misma normativa: (i) los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida (Art. 1227 C. Comercio); y (ii) dentro de los deberes del fiduciario está invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca (Art. 1234-3). A partir de este marco normativo, la doctrina nacional ha considerado que “[e]l fiduciario, en cumplimiento de la finalidad perseguida, tiene el poder-deber de contraer obligaciones con cargo al patrimonio autónomo, respetando los términos y condiciones fijados para el efecto en el contrato.” Consecuentemente, al surgir tales deudas los bienes fideicomitados</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>deben servir como respaldo de ellas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 1227 del Código de Comercio, a cuyo tenor los bienes objeto de la fiducia “solo garantizan las obligaciones contraídas.” En tal sentido, si bien el patrimonio autónomo no es persona jurídica, sus bienes puede ser gravados por el fiduciario en las mismas condiciones aplicables a un sujeto de derecho.</i></p> <p>De esta forma, el patrimonio autónomo es un centro de imputación de derechos y obligaciones, de carácter temporal y diferente a la persona que le dio origen (fiduciante, fideicomitente o constituyente), quien lo administra (fiduciario) y quien habrá de recibirlo (fideicomisario o beneficiario).</p> <p>Es pertinente destacar que el contrato de fiducia mercantil difiere del de fiducia pública. La figura de la fiducia pública, que es diferente de la sociedad fiduciaria pública, se encuentra contemplada en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el cual señala, entre otras cosas que: “[l]os encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>contratos que tales entidades celebren”.</i></p> <p>En relación con ello, esta Corporación a través de la sentencia C-086 de 1995 estimó que aunque el Estatuto General de la Contratación Pública creó un nuevo tipo de contrato, sin definirlo, denominado "fiducia pública", se puede entender que éste “(...) <i>no se relaciona con el contrato de fiducia mercantil contenido en el Código de Comercio y en las disposiciones propias del sistema financiero. Se trata, pues, de un contrato autónomo e independiente, más parecido a un encargo fiduciario que a una fiducia (por el no traspaso de la propiedad, ni la constitución de un patrimonio autónomo), al que le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley</i>”.</p> <p>Así mismo, como se dijo, esta Corporación en la sentencia C-244 de 2011 revisó la constitucionalidad del Decreto 4832 de 2010 y lo declaró exequible bajo el entendido de que la facultad del Fondo Nacional de Vivienda para celebrar contratos fiduciarios sería hasta el año 2014. Para arribar a dicha decisión, la Corte primero se refirió a la naturaleza y finalidad del contrato de fiducia</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>mercantil. En este sentido, adujo que este era un contrato utilizado por la administración pública para cumplir los fines constitucionales previstos en el artículo 2° Superior. Así, se refirió brevemente a la Ley 222 de 1983 como un antecedente del contrato de fiducia pública contemplado en el numeral 5° del artículo 30 del Estatuto General de la Contratación Pública. Por otra parte, esta Corporación en esa misma providencia reseñó las diferencias que existen entre las fiducias públicas y privadas de la siguiente forma:</p> <p>i. El contrato de fiducia pública no permite la transferencia del dominio de los bienes involucrados en el mandato que se otorga. En consecuencia, no se constituye un patrimonio autónomo diferente al propio.</p> <p>ii. Las entidades públicas no pueden delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de contratos que resulten necesarios para el desarrollo de la fiducia pública.</p> <p>iii. Los contratos de fiducia pública deben celebrarse con un objeto y plazo determinados.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>IV. Además de la vigilancia que ejerce la Superintendencia Financiera sobre las sociedades fiduciarias, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, deben ejercer control sobre las actuaciones de la fiduciaria en relación con la ejecución de recursos públicos.</p> <p>El artículo primero del Decreto 691 de 2017 establece la sustitución del <i>Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto</i> por el Fondo Colombia en Paz como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas. A su vez, dispone que los actos contratos y actuaciones del FCP se rigen por el derecho privado pero con sujeción a los principios de objetividad, moralidad, razonabilidad, transparencia, eficiencia y economía.</p> <p>Así, mediante esta norma el decreto ley bajo examen sustituye un fondo especial sin personería jurídica previo por uno similar pero introduce tres elementos nuevos: (i) lo determina como un patrimonio autónomo; (ii) administrado por una o más</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>sociedades fiduciarias públicas; y (iii) regido por el derecho privado pero con sujeción a los principios de objetividad, moralidad, razonabilidad, transparencia, eficiencia y economía. Estas modificaciones estructuran su naturaleza como un fondo cuenta y patrimonio autónomo del orden nacional establecido mediante ley con destinación específica”.</p> <ul style="list-style-type: none">• De otra parte, la determinación de la administración por una o varias sociedades fiduciarias públicas también ha sido abordada por esta Corporación. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la determinación de la administración de fondos mixtos es una cuestión que hace parte del margen de configuración del Legislador.• En estos términos, es claro que la determinación de la forma de administración de los fondos especiales hace parte del margen de configuración del Legislador e incluye la posibilidad de establecer un fondo organizado como patrimonio autónomo,	
--	--	--	--	--	--	--

						administrado por una sociedad fiduciaria pública		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

CORTE CONSTITUCIONAL